

INE/CG688/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020
DENUNCIANTES: KEVIN GARCÍA EICHNER, OTRAS Y OTROS.
DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VIOLACIÓN AL DERECHO POLÍTICO DE LIBRE AFILIACIÓN DE KEVIN GARCÍA EICHNER, NORA HILDA ZAVALA ORTEGA, NATALIA MARGARITA COMPEÁN RODRÍGUEZ, MARIANA GUADALUPE NAYHELY GONZÁLEZ CASTILLO, CÉSAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARIANO MORENO LUNA, ROSARIO DEL PILAR GÓMEZ PÉREZ, MOISÉS GÓMEZ MÉNDEZ, LAURA MA. DEL CARMEN VALDIVIA MÉNDEZ, LIZBETH SARAÍ RODRÍGUEZ RUIZ, MARÍA GUADALUPE LÓPEZ OLMEDO, SIOMARA PAOLA RENTERÍA LUGO, ADEMAIDA GARCILAZO AMBRIS, SILVIA CAROLINA VALDEZ MARÍN, ROSA ABILENE MIRELES CASTAÑEDA, ANDRÉS ALBA TALAMANTES, ROSA EMMA GARCÍA RAMÍREZ, JUAN PEDRO RUELAS FRANCO, MARIEL TORRES ORTIZ, JORGE EDUARDO HEMKES MORENO Y OLIMPIA PÉREZ MENDOZA, QUIENES ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR Y/O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

G L O S A R I O	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>DECEYEC</i>	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
<i>IFE</i>	Instituto Federal Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PVEM</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

1. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron veintiún escritos de queja signados por igual número de personas quienes, alegaron la posible violación a su derecho político de libre afiliación en su modalidad positiva — indebida afiliación— atribuida al *PVEM*, en su caso el uso de sus datos personales para tal fin.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Quejosa o quejoso	Fecha de recepción en la UTCE
1	Kevin García Eichner	10/11/2020 ¹
2	Nora Hilda Zavala Ortega	10/11/2020 ²
3	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	09/11/2020 ³
4	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	09/11/2020 ⁴
5	César Jiménez Sánchez	06/11/2020 ⁵
6	Mariano Moreno Luna	30/10/2020 ⁶
7	Rosario Del Pilar Gómez Pérez	30/10/2020 ⁷
8	Moisés Gómez Méndez	06/11/2020 ⁸
9	Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez	06/11/2020 ⁹
10	Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz	06/11/2020 ¹⁰
11	María Guadalupe López Olmedo	06/11/2020 ¹¹
12	Siomara Paola Rentería Lugo	05/11/2020 ¹²
13	Ademaida Garcilazo Ambris	05/11/2020 ¹³
14	Silvia Carolina Valdez Marín	05/11/2020 ¹⁴
15	Rosa Abilene Mireles Castañeda	05/11/2020 ¹⁵
16	Andrés Alba Talamantes	05/11/2020 ¹⁶
17	Rosa Emma García Ramírez	06/11/2020 ¹⁷
18	Juan Pedro Ruelas Franco	05/11/2020 ¹⁸
19	Mariel Torres Ortiz	06/11/2020 ¹⁹
20	Jorge Eduardo Hemkes Moreno	06/11/2020 ²⁰
21	Olimpia Pérez Mendoza	05/11/2020 ²¹

2. RADICACIÓN, ADMISIÓN, RESERVA EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE BAJA COMO MILITANTES DEL PVEM.²² El

¹ Visible a hoja 01 del expediente.

² Visible a hoja 06 del expediente.

³ Visible a hoja 20 del expediente.

⁴ Visible a hoja 77 del expediente.

⁵ Visible a hojas 61 a 62 del expediente.

⁶ Visible a hojas 43 a 44 del expediente.

⁷ Visible a hojas 43 a 44 del expediente.

⁸ Visible a hojas 70 a 71 del expediente.

⁹ Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹⁰ Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹¹ Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹² Visible a hojas 142 a 143 del expediente.

¹³ Visible a hoja 11 del expediente.

¹⁴ Visible a hoja 125 del expediente.

¹⁵ Visible a hojas 151 a 152 del expediente.

¹⁶ Visible a hojas 151 a 152 del expediente.

¹⁷ Visible a hoja 84 del expediente.

¹⁸ Visible a hojas 93 a 94 del expediente.

¹⁹ Visible a hojas 99 a 100 del expediente.

²⁰ Visible a hojas 99 a 100 del expediente.

²¹ Visible a hoja 135 del expediente.

²² Visible a hojas 169 a 179 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante acuerdo emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020**, mismo que fue admitido a trámite, reservándose lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en tanto hubiere concluido la etapa de investigación.

Con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la *DEPPP* y al *PVEM*, a efecto de que proporcionaran información relacionada con la presunta indebida afiliación de las y los denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>DEPPP</i>	INE-UT/4281/2020 ²³	09/12/2020 Correo electrónico ²⁴
<i>PVEM</i>	INE-UT/4280/2020 ²⁵	02/12/2020 Oficio: PVEM-INE-257/2020 ²⁶ Informó las fechas de afiliación y cancelación de los registros de las personas denunciantes.

Finalmente, en dicho acuerdo se solicitó al *PVEM* que realizara la baja de **Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaída Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco, Mariel Torres Ortiz, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza**, de su catálogo de militantes en el Sistema de Verificación de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, de su página de internet y en cualquier otra base pública en la que pudieren encontrarse, en el caso de que aún estuvieran inscritos en el mismo.

²³ Visible a hoja 209 del expediente.

²⁴ Visible a hojas 218 a 219 del expediente.

²⁵ Visible a hoja 205 del expediente.

²⁶ Visible a hojas 185 a 187 del expediente.

Respecto al requerimiento formulado al partido político denunciado y en alcance al oficio PVEM-INE-257/2020, el representante suplente del *PVEM* ante el Consejo General del *INE*, presentó los siguientes oficios:

- PVEM-INE-2668/2020²⁷, a través del cual, exhibe las cédulas de afiliación originales y copias de la credencial para votar de **Moisés Gómez Méndez, César Jiménez Sánchez, Rosario del Pilar Gómez Pérez, Mariano Moreno Luna, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Jorge Eduardo Hemkes Moreno, Nora Hilda Zavala Ortega y Ademaida Garcilazo Ambris.**
- PVEM-INE-326/2020²⁸, mediante el cual, aporta la impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de **Olimpia Pérez Mendoza**, proporcionado por el Departamento de Generación de Insumos para Procesos Electorales, de la Dirección de Productos y Servicios Electorales del registro Federal de Electores del *INE*, lo anterior, en virtud de que dicha ciudadana fue afiliada mediante aplicación móvil.
- PVEM-INE-326/2020²⁹, a través del cual, exhibe la cédula de afiliación original y copia de la credencial para votar de **Kevin García Eichner.**
- PVEM-INE-380/2020³⁰, mediante el cual, proporciona la cédula de afiliación original y copia de la credencial para votar de **Siomara Paola Rentería Lugo.**

3. NUEVO REQUERIMIENTO AL *PVEM* Y A LA *DEPPP* Y OTORGAMIENTO DE PRÓRROGA AL PARTIDO POLÍTICO DENUNCIADO.³¹ Mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al *PVEM*, a efecto de que procediera a eliminar a **Natalia Margarita Compean Rodríguez**, de su padrón de militantes, lo anterior en razón de que al desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la *DEPPP* informó a la autoridad sustanciadora que la referida ciudadana continuaba apareciendo con un estatus de registro valido, de igual forma, se hizo del conocimiento del instituto político denunciado que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se le impondría una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización.

²⁷ Visible a hoja 220 y anexos de 221 a 236 del expediente.

²⁸ Visible a hoja 259 y anexo 260 del expediente.

²⁹ Visible a Hoja 261 y anexo de 262 a 263 del expediente.

³⁰ Visible a Hoja 290 y anexo de 291 a 292 del expediente.

³¹ Visible a hojas 293 a 300 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

En este tenor, se solicitó a la *DEPPP*, a efecto de que informara si **Natalia Margarita Compean Rodríguez**, continuaba registrada dentro del padrón de militantes del *PVEM*.

De igual forma, se concedió la prórroga solicitada por el *PVEM*, a efecto de que, en el plazo de tres días, proporcionara el original de las constancias de afiliación correspondientes a **Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, haciéndole de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, tendría como consecuencia que en el momento procesal oportuno se resolvería con las constancias existentes en autos.

Dicho requerimiento, fue diligenciado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>DEPPP</i>	INE-UT/00849/2021 ³²	12/02/2021 Correo electrónico ³³
<i>PVEM</i>	INE-UT/00848/2021 ³⁴	10/02/2021 Oficio: PVEM-INE-157/2021 ³⁵

En alcance a los oficios PVEM-INE-257/2020 y PVEM-INE-157/2021, el representante suplente del *PVEM* ante el Consejo General del *INE*, mediante similar **PVEM-INE-185/2021**³⁶, exhibió las cédulas de afiliación originales y copias de la credencial para votar de **Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes y Rosa Emma García Ramírez**.

4. RESPUESTA A SOLICITUD DEL *PVEM*, VISTA A DENUNCIANTES Y DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN DE DESAFILIACIÓN.³⁷ Toda vez que mediante oficio PVEM-INE-157/2021, el partido político denunciado, solicitó nuevamente prórroga a efecto de proporcionar el original de las cédulas de afiliación faltantes,

³² Visible a hoja 305 del expediente.

³³ Visible a hojas 312 a 313 del expediente.

³⁴ Visible a hoja 307 del expediente.

³⁵ Visible a Hoja 310 del expediente.

³⁶ Visible a Hoja 317 y anexos de 318 a 329 del expediente.

³⁷ Visible a hojas 330 a 337 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

por proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se determinó no otorgar la segunda prórroga solicitada, en razón de que el denunciado tuvo diversas oportunidades para presentar la documentación solicitada, haciéndose del conocimiento al mismo, que dentro del procedimiento que nos ocupa, aún existían etapas procesales pendientes por desahogar, en las cuales podía presentar las pruebas que considerara pertinentes.

De igual forma, se dio vista a **Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza**, con las cédulas de afiliación proporcionadas por el *PVEM*, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo cual, fue diligenciado de conformidad con el siguiente cuadro:

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
1	Kevin García Eichner	31/03/2021 ³⁸	Escrito 31/03/2021 ³⁹ Desconoce todos los espacios llenados en el formato de afiliación que proporcione el <i>PVEM</i> , ya que no es su firma ni su letra y en ningún momento dio su consentimiento para que lo afiliaran, solicitando su baja del padrón de afiliados.
2	Nora Hilda Zavala Ortega	31/03/2021 ⁴⁰	Escrito 31/03/2021 ⁴¹ Desconoce el llenado de todos y cada uno de los espacios del formato que proporcione el <i>PVEM</i> , solicitando su baja de la lista de afiliados.
3	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	30/03/2021 ⁴²	Escrito 30/03/2021 ⁴³ No reconoce estar afiliada al <i>PVEM</i> , por lo que solicitara que se le presente comprobante de su firma,

³⁸ Visible a hojas 434 a 439 del expediente.

³⁹ Visible a hoja 432 del expediente.

⁴⁰ Visible a hoja 441 del expediente.

⁴¹ Visible a hojas 425, 432 a 433 del expediente.

⁴² Visible a hojas 411 a 417 del expediente.

⁴³ Visible a hoja 418 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
			<p>en el cual se advierta que aceptó pertenecer a dicho partido como militante.</p> <p>Asegura fehacientemente que nunca ha firmado algún registro como se menciona, por lo que si existiera firma alguna al calce de dicho documento o registro solicitara la investigación y estudio de la firma con un grafólogo.</p>
4	César Jiménez Sánchez	27/04/2021 ⁴⁴	No dio respuesta
5	Mariano Moreno Luna	28/04/2021 ⁴⁵	<p>Escrito 30/04/2021⁴⁶</p> <p>Señala que en ningún momento se afilio al <i>PVEM</i>, que al verificar el formato de afiliación, el mismo no está escrito con su letra y pulso por lo que está firmado a tercera persona que no conoce, solicitando que se coteje su firma real con su credencial de elector.</p> <p>Que en la fecha que lo afiliaron estaba trabajando como administrativo de la Visitaduría de Palenque, Chiapas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.</p>
6	Rosario del Pilar Gómez Pérez	27/04/2021 ⁴⁷	No dio respuesta
7	Moisés Gómez Méndez	09/04/2021 ⁴⁸	No dio respuesta
8	Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez	31/03/2021 ⁴⁹	No dio respuesta
9	Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz	31/03/2021 ⁵⁰	No dio respuesta
10	María Guadalupe López Olmedo	31/03/2021 ⁵¹	No dio respuesta

⁴⁴ Visible a hojas 479 a 481 y 497 a 499 del expediente.

⁴⁵ Visible a hoja 476 a 478 del expediente.

⁴⁶ Visible a hoja 470 del expediente.

⁴⁷ Visible a hojas 482 a 484 y 503 a 505 del expediente.

⁴⁸ Visible a hojas 404 a 409 del expediente.

⁴⁹ Visible a hojas 455 a 459 del expediente.

⁵⁰ Visible a hojas 445 a 449 del expediente.

⁵¹ Visible a hojas 450 a 454 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
11	Siomara Paola Rentería Lugo	30/03/2021 ⁵²	Escrito de fecha 06/04/2021 ⁵³ No ha sido afiliada bajo su propia voluntad al <i>PVEM</i> , tampoco ha sido dirigente en ningún sentido.
12	Ademaida Garcilazo Ambris	29/03/2021 ⁵⁴	Escrito 29/03/2021 ⁵⁵ Objeta la autenticidad de las pruebas, su alcance y valor probatorio, toda vez que en ningún momento ha estado afiliada o ha sido militante del <i>PVEM</i> u otro partido político, no reconoce la firma, refiriendo que es apócrifa. No es su letra, nunca ha llenado una cédula de afiliación al <i>PVEM</i> , ni ha sido su decisión pertenecer al mismo. Existe la presunción humana que no conocen a su persona, toda vez que asientan que su nivel de estudios es preparatoria, cuando es Licenciada en Derecho, con Maestría en Educación, con especialidad en docencia, lo cual acredita con las documentales respectivas. Es probable que la derivación del expediente que nos ocupa, se deba a que cuenta con programas sociales del municipio, que en ocasiones les solicitan copia de la credencial expedida por el <i>INE</i> , son programas sociales que no están sujetos a partidismos políticos.
13	Rosa Abilene Mireles Castañeda	07/04/2021 ⁵⁶	Escrito 12/04/2021 ⁵⁷ Objeta la autenticidad del formato de afiliación dado que la firma que se encuentra al calce no es suya, se trata de una firma diversa que se intentó suplantar por la suya, es decir, es falsa. Para acreditarlo adjunta copia fotostática de su credencial para votar y ofrece la prueba de inspección que habrá de desahogar el departamento de la Unidad

⁵² Visible a hojas 462 a 465 del expediente.

⁵³ Visible a hojas 466 a 467 del expediente.

⁵⁴ Visible a hojas 389 a 396 del expediente.

⁵⁵ Visible a hojas 358 a 367 y 397 a 402 del expediente.

⁵⁶ Visible a hojas 491 a 493 y 516 a 518 del expediente.

⁵⁷ Visible a hoja 494 a 495 y 519 a 520 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
			Técnica de servicios de informática o quien corresponda del <i>INE</i> , el cual habrá de inspeccionar lo siguiente: La base de datos digitales donde se encuentran los datos de su registro, para que haga constar que en la misma, se encuentra registrada su firma, a efecto de que se coteje la firma que se encuentra al calce de la documental impugnada y la que se encuentra en esa base de datos y efectúe conclusión respecto si hay similitud entre la una y la otra.
14	Andrés Alba Talamantes	06/04/2021 ⁵⁸	No dio respuesta
15	Rosa Emma García Ramírez	30/03/2021 ⁵⁹	Escrito ⁶⁰ 20/04/2021 Objeta la autenticidad de la prueba y valor probatorio, el documento presentado no corresponde a su letra, la información esta remarcada y los datos que presentan, no son legítimos. Dentro del campo de escolaridad colocaron secundaria, mientras que su grado de escolaridad corresponde a licenciatura concluida. Señala que en una ocasión una representante del <i>PVEM</i> , ofreció una despensa, para lo cual pidió copia de la credencial y firma para poder entregarla, mencionando que dicha despensa nunca fue entregada.
16	Jorge Eduardo Hemkes Moreno	31/03/2021 ⁶¹	No dio respuesta
17	Olimpia Pérez Mendoza	31/03/2021 ⁶²	No dio respuesta

De igual forma, se ordenó la inspección del contenido de la página de internet del *PVEM*, a efecto de verificar si las personas denunciadas, continuaban apareciendo en el padrón de militantes de dicho instituto político, advirtiéndose que **su registro ya**

⁵⁸ Visible a hojas 488 a 490 y 513 a 515 del expediente.

⁵⁹ Visible a hojas 369 a 372 y 381 a 384 del expediente.

⁶⁰ Visible a hoja 460 del expediente.

⁶¹ Visible a hojas 421 a 424 del expediente.

⁶² Visible a hojas 385 a 388 del expediente.

no era visible, resultado que constó en acta circunstanciada instruida por el personal de la *UTCE*.⁶³

5. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA DERFE Y NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DECEYEC, ASÍ COMO A LOS VOCALES EJECUTIVO Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS DE ESTE INSTITUTO.⁶⁴ Mediante proveído de cinco de julio dos mil veintiuno, se solicitó a la *DERFE* a efecto de que informara si la cédula de afiliación de **Olimpia Pérez Mendoza**, fue realizada mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano INE” y de ser el caso, proporcionara la misma, lo anterior, en razón de que el *PVEM*, exhibió impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de dicha ciudadana.

Dicho requerimiento, se llevó a cabo como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Correo electrónico	Respuesta
<i>DERFE</i>	06/07/2021 ⁶⁵	02/08/2021 Correo electrónico ⁶⁶

De igual forma, y toda vez que el presente procedimiento inició con motivo de las quejas presentadas por **Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco, Mariel Torres Ortiz, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza**, quienes estuvieron participando en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales en el marco del proceso electoral federal 2020-2021, **se ordenó notificar** a la Dirección de Capacitación de *DECEYEC*, así como a los Vocales Ejecutivos y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Distritales Ejecutivas de este instituto, 02 y 06 en San Luis Potosí; 11 en el Estado de México; 03 y 05 en Chiapas; 01 en

⁶³ Visible a hojas 338 a 351 del expediente.

⁶⁴ Visible a hojas 521 a 533 del expediente.

⁶⁵ Visible a hoja 534 del expediente.

⁶⁶ Visible a hojas 540 a 545 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Aguascalientes; 04 en Sinaloa; 01, 06 y 12 en Jalisco; 04 en Zacatecas; 04 en Guanajuato y 04 en Oaxaca, con las respuestas emitidas por el *PVEM* y lo informado por la *DEPPP*, así como las manifestaciones formuladas por Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Mariano Moreno Luna, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda y Rosa Emma García Ramírez, respecto del asunto que nos ocupa.

Lo anterior, fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto	Correo electrónico
Dirección de Capacitación <i>DECEYEC</i>	06/07/021 ⁶⁷
JDE 02 y 06 en San Luis Potosí 11 en el Estado de México 03 y 05 en Chiapas 01 en Aguascalientes 04 en Sinaloa 01, 06 y 12 en Jalisco 04 en Zacatecas 04 en Guanajuato 04 en Oaxaca	06/07/2021 ⁶⁸

6. EMPLAZAMIENTO.⁶⁹ Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al *PVEM*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes, en relación con los hechos denunciados.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PVEM</i>	INE-UT/8783/2021 ⁷⁰	Citatorio: 03/09/2021 ⁷¹ Cédula: 21/09/2021 ⁷²	28/09/2021

⁶⁷ Visible a hoja 535 del expediente.

⁶⁸ Visible a hojas 536 a 537 del expediente.

⁶⁹ Visible a hojas 546 a 552 del expediente.

⁷⁰ Visible a hoja 554 del expediente.

⁷¹ Visible a hojas 555 a 556 del expediente.

⁷² Visible a hoja 557 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Denunciado	Oficio	Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
		Plazo: 22 al 28 de septiembre de 2021.	Correo electrónico ⁷³

7. VISTA DE ALEGATOS.⁷⁴ Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, dicho acuerdo fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

No.	Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
1	Kevin García Eichner	INE/06JDE/VS/455/2021 ⁷⁵	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
2	Nora Hilda Zavala Ortega	INE/06JDE/VS/456/2021 ⁷⁶	Notificación: 28/10/2021 Plazo: del 29 de octubre al 08 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
3	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	INE/SLP/02JDE/VS/429/2021 ⁷⁷	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
4	Mariana Guadalupe Nayheli González Castillo	INE-JDE19-MEX/VE/0758/2021 ⁷⁸	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
5	César Jiménez Sánchez	INE/CHIS/03JDE/VE/1701/2021 ⁷⁹	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
6	Mariano Moreno Luna	INE/CHIS/03JDE/VE/1697/2021 ⁸⁰	Notificación: 28/10/2021 Plazo: del 29 de octubre al 08 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
7	Rosario Del Pilar Gómez Pérez	INE/CHIS/03JDE/VE/1702/2021 ⁸¹	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
8	Moisés Gómez Méndez	INE/05JDE/VS/679/2021 ⁸²	Notificación: 17/11/2021 Plazo: del 18 al 24 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
9	Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez	INE/01JDE-AGS/VS/0873/2021 ⁸³	Notificación: 29/10/2021	Sin respuesta

⁷³ Visible a hojas 561 a 580 del expediente.

⁷⁴ Visible a hojas 581 a 584 del expediente.

⁷⁵ Visible a hojas 715 a 724 del expediente.

⁷⁶ Visible a hojas 725 a 730 del expediente.

⁷⁷ Visible a hojas 659 a 664 del expediente.

⁷⁸ Visible a hojas 650 a 658 del expediente.

⁷⁹ Visible a hojas 739 a 741 del expediente.

⁸⁰ Visible a hojas 742 a 745 del expediente.

⁸¹ Visible a hojas 746 a 748 del expediente.

⁸² Visible a hojas 733 a 736 del expediente.

⁸³ Visible a hojas 701 a 704 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
			Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	
10	Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz	INE/01JDE-AGS/VS/0872/2021 ⁸⁴	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
11	María Guadalupe López Olmedo	INE/01JDE-AGS/VS/0874/2021 ⁸⁵	Notificación: 29/10/2021 Plazo: del 03 al 09 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
12	Siomara Paola Rentería Lugo	INE/VS/JDE04-SIN/1398/2021 ⁸⁶	Notificación: 28/10/2021 Plazo: del 29 de octubre al 08 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
13	Ademaida Garcilazo Ambris	INE/SLP/02JDE/VS/430/2021 ⁸⁷	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Correo electrónico 03/11/2021 ⁸⁸ Remite escrito
14	Silvia Carolina Valdez Marín	INE-JAL-JDE12-VS-0353-2021 ⁸⁹	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
15	Rosa Abilene Mireles Castañeda	INE-JDE04-ZAC/1338/2021 ⁹⁰	Notificación: 05/11/2021 Plazo: del 08 al 12 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
16	Andrés Alba Talamantes	INE-JDE04-ZAC/1334/2021 ⁹¹	Notificación: 08/11/2021 Plazo: del 09 al 15 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
17	Rosa Emma García Ramírez	INE/GTO/04JDE/VS/0283/21 ⁹²	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
18	Juan Pedro Ruelas Franco	INE-JAL-JDE01-VS-1071-2021 ⁹³	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
19	Mariel Torres Ortiz	INE/JAL-JDE06/VE/01191/2021 ⁹⁴	Notificación: 03/11/2021 Plazo: del 04 al 10 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
20	Jorge Eduardo Hemkes Moreno	INE-JAL-JDE06-VE-01192-2021 ⁹⁵	Notificación: 03/11/2021 Plazo: del 04 al 10 de noviembre de 2021.	Sin respuesta

⁸⁴ Visible a hojas 705 a 708 del expediente.

⁸⁵ Visible a hojas 709 a 712 del expediente.

⁸⁶ Visible a hojas 751 a 757 y 759 a 763 del expediente.

⁸⁷ Visible a hojas 670 a 675 del expediente.

⁸⁸ Visible a hojas 597 a 601 y 666 a 669 del expediente.

⁸⁹ Visible a hojas 624 a 628 del expediente.

⁹⁰ Visible a hojas 689 a 693 del expediente.

⁹¹ Visible a hojas 685 a 687 del expediente.

⁹² Visible a hojas 618 a 622 del expediente.

⁹³ Visible a hojas 696 a 699 del expediente.

⁹⁴ Visible a hojas 681 a 683 del expediente.

⁹⁵ Visible a hojas 676 a 680 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
21	Olimpia Pérez Mendoza	INE/OAX/JDE04/VS/1127/2021 ⁹⁶	Notificación: 27/10/2021 Plazo: del 28 de octubre al 05 de noviembre de 2021.	Sin respuesta
22	Denunciado <i>PVEM</i>	INE-UT/9840/2021 ⁹⁷	Notificación: 28/10/2021 Plazo: del 29 de octubre al 08 de noviembre de 2021.	Correo electrónico 05/11/2021 ⁹⁸

8. DESAHOGO Y OMISIÓN A LA VISTA DE ALEGATOS, REPOSICIÓN DE DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN A JORGE EDUARDO HEMKES MORENO Y KEVIN GARCÍA EICHNER.⁹⁹ Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la denunciante Ademaida Garcilazo Ambris y al Partido Verde Ecologista de México, desahogando la vista de alegatos, formulada a través del proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, Así mismo, se dejó constancia que las personas denunciantes Nora Hilda Zavala Ortega, Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco, Mariel Torres Ortiz y Olimpia Pérez Mendoza, omitieron desahogar la vista de alegatos, no obstante haber sido debidamente notificados.

De igual forma se ordenó reponer las diligencias de notificación ordenadas en el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, a los denunciantes **Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Kevin García Eichner**, lo anterior, fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

No.	Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
1	Kevin García Eichner	INE/06JDE/VS/528/2021 ¹⁰⁰	Notificación: 10/12/2021 Plazo: del 13 al 17 de diciembre de 2021.	Sin respuesta
2	Jorge Eduardo Hemkes Moreno	INE-JAL-JDE06-VS-01286-2021 ¹⁰¹	Notificación: 02/12/2021 Plazo: del 03 al 09 de diciembre de 2021.	Sin respuesta

⁹⁶ Visible a hojas 609 a 617 del expediente.

⁹⁷ Visible a hojas 591 a 596 del expediente.

⁹⁸ Visible a hojas 630 a 648 del expediente.

⁹⁹ Visible a hojas 764 a 776 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a hojas 788 a 795 y 797 a 804 del expediente.

¹⁰¹ Visible a hojas 781 a 786 del expediente.

9. VISTA A DENUNCIANTES Y AL PVEM, ATRACCIÓN DE CONSTANCIAS, REQUERIMIENTO A LA DERFE, TOMA DE MUESTRAS PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL Y SOLICITUD DE APOYO A LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO EN FUNCIÓN DE COORDINADORA DE LA OFICIALÍA ELECTORAL.¹⁰² Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, la *UTCE* consideró necesario desahogar prueba pericial en grafoscopía, toda vez que **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda y Mariano Moreno Luna**, en sus respuestas a la vista formulada mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, controvirtieron de manera frontal y directa la documentación exhibida por el *PVEM*, al manifestar que no suscribieron las cédulas de afiliación y que la firma que se observa en ellas es falsa.

En virtud de ello, se dio vista a dichas personas denunciantes y al *PVEM* para que adicionaran las preguntas que consideraran necesarias, respecto del cuestionario con el que se le corrió traslado y a efecto de que las y los denunciantes aportaran algunos documentos originales y se presentaran en la Junta Distrital o Local más cercana a su domicilio, con el objeto de que funcionarios de dichos órganos, le tomaran las muestras de las firmas necesarias para el desahogo de la prueba pericial respectiva.

De igual forma, se agregaron al presente asunto, constancias del expediente UT/SCG/Q/MMPG/CG/215/2018, mismas que tienen relación con el desahogo de la prueba pericial referida.¹⁰³

En el mismo proveído, se le requirió a la *DERFE* para que proporcionara el tarjetón de firmas o los soportes documentales donde constara el histórico de firmas de las personas en cuestión.

Además, se solicitó el apoyo a la Directora del Secretariado en función de Coordinadora de Oficialía Electoral, para que instruyera la presencia de funcionarios o funcionarias con atribuciones de Oficialía Electoral a efecto de que tomaran las muestras de firmas de **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda y Mariano Moreno Luna**. Dicho acuerdo fue notificado y desahogado de la siguiente manera:

¹⁰² Visible a hojas 805 a 816 del expediente

¹⁰³ Visible a hojas 818 a 826 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Denunciante	Oficio	Plazo	Contestación
Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	INE-JDE19-MEX/VE/054/2022 ¹⁰⁴	Notificación: 02/02/2022 Plazo: del 03 al 07 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Ademaida Garcilazo Ambris	INE/SLP/02JDE/VS/025/2022 ¹⁰⁵	Notificación: 31/01/2022 Plazo: del 01 al 03 de enero de 2022.	Sin respuesta
Rosa Abilene Mireles Castañeda	INE/JDE04-ZAC/0129/2022 ¹⁰⁶	Notificación: 02/02/2022 Plazo: del 03 al 07 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Mariano Moreno Luna	INE/CHIS/JDE03/VE/0103/2022 ¹⁰⁷	Notificación: 01/02/2022 Plazo: del 02 al 04 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Denunciado	INE-UT/00430/2022 ¹⁰⁸	Notificación: 27/01/2022 Plazo: del 28 de enero al 01 de febrero de 2022.	Correo electrónico 01/02/2022 ¹⁰⁹
<i>PVEM</i>			

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>DERFE</i>	SAI ¹¹⁰	08/02/2022 Oficio INE/DERFE/STN/02185/2022 ¹¹¹
Directora del Secretariado	SAI ¹¹²	01/02/2022 Oficio INE/DS/0169/2022 ¹¹³

Respecto a la toma de muestras de firmas, se recibió lo siguiente:

- Oficio INE/DS/0225/2022,¹¹⁴ a través del cual, la Directora del Secretariado del *INE*, remitió el acta circunstanciada INE/OE/JD/SLP/02/CIRC/001/2022, elaborada por el vocal secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de este instituto en San Luis Potosí, con motivo de la comparecencia de Ademaida **Garcilazo Ambris**, para la toma de muestras de firmas necesarias para el desahogo de la respectiva prueba pericial.

¹⁰⁴ Visible a hojas 924 a 936 del expediente.

¹⁰⁵ Visible a hojas 850 a 863 del expediente.

¹⁰⁶ Visible a hojas 918 a 920 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a hojas 914 a 916 del expediente.

¹⁰⁸ Visible a hoja 828 a 830 del expediente.

¹⁰⁹ Visible a hojas 839 a 841 del expediente.

¹¹⁰ Visible a hojas 835 a 836 del expediente.

¹¹¹ Visible a hojas 876 a 882 y anexos de 883 a 911 del expediente.

¹¹² Visible a hojas 837 a 838 del expediente.

¹¹³ Visible a hojas 843 a 848 del expediente.

¹¹⁴ Visible a hojas 864 a 875 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

- Oficio INE/JDE04-ZAC/VS/165/2022,¹¹⁵ mediante el cual, el Vocal Secretario de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del *INE* en Zacatecas, remitió entre otros documentos, el acta circunstanciada AC10/INE/ZAC/JDE04/07-02-2022, instrumentada con motivo del vencimiento del plazo para la toma de muestras de firmas de **Rosa Abilene Mireles Castañeda**, sin que la citada ciudadana se presentara a dicha diligencia.
- Oficio INE/DS/0297/2022¹¹⁶, por el cual, la Directora del Secretariado del *INE*, remitió el acta circunstanciada INE/MEX/OE/19JDE/CIRC/01/2022, elaborada por la vocal secretaria de la 19 Junta Distrital Ejecutiva de este instituto en el Estado de México, con motivo de la comparecencia de **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo**, para la toma de muestras de firmas necesarias para el desahogo de la respectiva prueba pericial.

10. DESAHOGO DE VISTA DE CUESTIONARIOS Y DE TOMA DE MUESTRAS DE FIRMAS Y SOLICITUD DE COLABORACIÓN AL TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.¹¹⁷ En virtud de que por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós se dio vista a **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Mariano Moreno Luna y al PVEM**, a efecto de que adicionaran las preguntas que consideraran necesarias, respecto del cuestionario con el que se le corrió traslado, por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al partido político denunciado, formulando sus respectivas manifestaciones y por propuestas las preguntas que solicitó se adicionaran al cuestionario de mérito.

Toda vez que **Mariano Moreno Luna y Rosa Abilene Mireles Castañeda**, no comparecieron a la Junta Distrital o Local más cercana a su domicilio a la toma de muestras de firmas, ni adicionaron pregunta alguna, se hizo efectiva la prevención formulada en el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, por lo que se les tuvo por desierta la pericial en materia de grafoscopia.

De igual forma, se solicitó el auxilio del Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República a efecto de designar un perito especializado para elaborar el dictamen pericial en grafoscopia, respecto a las denunciados **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris**.

¹¹⁵ Visible a hojas 917, 921 a 922 del expediente.

¹¹⁶ Visible a hojas 937 a 951 del expediente.

¹¹⁷ Visible a hojas 952 a 962 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Lo anterior fue notificado y desahogado de acuerdo a lo siguiente:

Denunciante	Oficio	Notificación
Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	INE-JDE19-MEX/VE/0194/2022 ¹¹⁸	04/05/2022
Ademaida Garcilazo Ambris	INE/SLP/02JDE/VS/180/2022 ¹¹⁹	02/05/2022
Rosa Abilene Mireles Castañeda	INE/JDE04-ZAC/0575/2022 ¹²⁰	04/05/2022
Mariano Moreno Luna	INE/CHIS/JDE03/VE/0842/2022 ¹²¹	06/05/2022

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República</i>	INE-UT/2719/2022 ¹²²	25/04/2022 Folio: 19799 ¹²³

11. VISTA A LAS PARTES CON DICTAMEN PERICIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA NORMATIVA DE LA DERFE.¹²⁴

Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las denunciantes Ademaida Garcilazo Ambris y Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, así como al Partido Verde Ecologista de México, con el dictamen pericial, emitido por el Perito en materia de Grafoscopia y Documentoscopia, de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, a efecto de que manifestaran lo que sus intereses conviniera.

De igual forma se ordenó la devolución de la documentación remitida por la Secretaría Técnica Normativa de la DERFE, la cual, fue proporcionada a efecto de contar con los elementos necesarios para la realización de las pruebas periciales en grafoscopia, solicitadas por **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda y Mariano Moreno Luna.**

Dicho acuerdo fue notificado y desahogado de acuerdo a lo siguiente:

¹¹⁸ Visible a hojas 1008 a 1016 del expediente.

¹¹⁹ Visible a hojas 997 a 1006 del expediente.

¹²⁰ Visible a hojas 994 a 996 del expediente.

¹²¹ Visible a hojas 1019 a 1021 del expediente.

¹²² Visible a hojas 965 a 967 del expediente.

¹²³ Visible a hoja 968 a 988 del expediente.

¹²⁴ Visible a hojas 1022 a 1028 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Denunciante	Oficio	Plazo	Contestación
Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	INE-JDE19- MEX/VE/0240/2022 ¹²⁵	Notificación: 27/05/2022 Plazo: del 30 de mayo al 01 de junio de 2022.	Sin respuesta
Ademaida Garcilazo Ambris	INE/SLP/02JDE/VS/214/2022 ¹²⁶	Notificación: 26/05/2022 Plazo: del 27 al 31 de mayo de 2022.	Sin respuesta
Rosa Abilene Mireles Castañeda	INE/JDE04-ZAC/0129/ 2022 ¹²⁷	Notificación: 02/02/2022 Plazo: del 03 al 07 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Mariano Moreno Luna	INE/CHIS/JDE03/VE/0103/20 22 ¹²⁸	Notificación: 01/02/2022 Plazo: del 02 al 04 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Denunciado	INE-UT/4907/2022 ¹²⁹	Notificación: 25/05/2022 Plazo: del 26 al 30 de mayo de 2022.	Oficio: PVEM-INE- 125/2022 31/05/2022 ¹³⁰
<i>PVEM</i>			

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>DERFE</i>	INE-UT/4908/2022 ¹³¹	No aplica

12. VERIFICACIÓN DE NO REAFILIACIÓN. El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, personal de la *UTCE*, ingresó al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la *DEPPP*, logrando advertir que la totalidad de personas denunciantes, siguen apareciendo con registro de militancia cancelado, sin que hubiera alguna nueva afiliación.

13. DESECHAMIENTO DE PRUEBA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO. Toda vez que mediante oficio PVEM-INE-177/2022 el *PVEM* aportó la cédula de afiliación de Natalia Margarita Compean Rodríguez, por acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la misma, por haber sido exhibida fuera del momento procesal oportuno.

¹²⁵ Visible a hojas 1099 a 1108 y de 1110 a 119 del expediente.

¹²⁶ Visible a hojas 1038 a 1061 del expediente.

¹²⁷ Visible a hojas 918 a 920 del expediente.

¹²⁸ Visible a hojas 914 a 916 del expediente.

¹²⁹ Visible a hoja 1032 a 1035 del expediente.

¹³⁰ Visible a hojas 1062 a 1094 del expediente.

¹³¹ Visible a hoja 1037 del expediente.

Además, toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

14. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, la Comisión de Quejas analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo unanimidad de votos de la Consejera Electoral Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, del Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, así como de la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de esa Comisión.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III; y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e), y), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del **PVEM**, en perjuicio de **Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco, Mariel Torres Ortiz, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza.**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el Consejo General.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral cometidas por los partidos políticos y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PVEM*, consistente, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de los denunciantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*,¹³² en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

¹³² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

**SEGUNDO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL
INE/CG33/2019**

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo, fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.
- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

Así, de conformidad con los elementos con que cuenta este Consejo General al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la *DEPPP* la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* vulneró el derecho de libre afiliación de **Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaída Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco, Mariel Torres Ortiz, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza**, en la modalidad positiva —indebida afiliación—

en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), x), e y) de la *LGPP*.

2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Al momento de dar respuesta al emplazamiento y en vía de alegatos, el denunciado hizo valer las siguientes excepciones y defensas:

- No existe afiliación indebida de las y los quejosos al *PVEM*, en razón de que es un derecho que se ejerce libremente cumpliendo el trámite correspondiente, en el caso, los quejosos de forma voluntaria presentaron fotocopia de la credencial de elector y llenaron la respectiva cédula de afiliación, por lo que la misma fue conforme a la normatividad electoral y a los estatutos de ese instituto político.
- Lo señalado en el punto que precede, se corrobora con la cédula de afiliación original y copia simple de la credencial de elector de Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, César Jiménez Sánchez, Mariano Moreno Luna, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Siomara Paola Rentería Lugo, Ademaida Garcilazo Ambris, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Rosa Emma García Ramírez, Jorge Eduardo Hemkes Moreno, así como con la impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de Olimpia Pérez Mendoza, documentos que fueron presentados por el denunciado.
- *El PVEM* firmó el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración con el *INE*, con la finalidad de que este, pusiera a disposición del partido político denunciado la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de sus afiliados.
- Olimpia Pérez Mendoza fue afiliada mediante aplicativo móvil, de tal forma que la impresión de la cédula digital, fue presentada a la autoridad sustanciadora, en la que se observan elementos mínimos que demuestran fehacientemente la debida afiliación de la ciudadana como son: nombre completo, clave de elector, fecha de afiliación, domicilio completo, la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

manifestación expresa de querer afiliarse y su firma, esto, con base en lo establecido en el Considerando 13 del Acuerdo INE/CG33/2020 y los Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político nacional, aprobados mediante el acuerdo INE/CG231/2019.

- La afiliación voluntaria de algunos quejosos fue en 2016, sin que en el periodo comprendido del 2016 al 2019 hayan presentado alguna queja por indebida afiliación, fue hasta 2020 cuando tuvieron la intención de aspirar al cargo de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as para el proceso electoral 2020-2021, como lo es el caso de Siomara Paola Rentería Lugo, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Juan Pedro Ruelas Franco.
- Los ciudadanos otorgaron su consentimiento para afiliarse al *PVEM*, toda vez que en los formatos de afiliación originales y en la cédula digital, se hace constar su voluntad expresa de afiliarse a dicho instituto político.
- Actualmente los quejosos no se encuentran registrados en el Padrón de afiliados del *PVEM*, lo anterior en atención a la voluntad manifestada por los mismos.
- No existe uso indebido de los datos personales de los quejosos, en razón de que ellos mismos los proporcionaron al afiliarse al *PVEM*, incluso en los mismos formatos de afiliación, se hace referencia al aviso de privacidad, los datos que les son requeridos son solo los necesarios para su debido registro, los cuales, son utilizados exclusivamente para los fines determinados por la legislación electoral y estatutaria correspondiente.
- El denunciado al haber presentado los formatos de afiliación originales, mediante los cuales demuestra que se otorgó el consentimiento expreso para la afiliación de los quejosos a ese instituto político y que claramente entregaron su identificación para ser fotocopias, siendo el motivo por el cual, se cuenta con sus datos personales.
- Invoca el principio de presunción de inocencia, toda vez que no existe prueba que demuestre plenamente la responsabilidad del *PVEM*, por lo cual, no es factible sustentar la infracción y la sanción que se le pretende aplicar.

- De resultar fundado el procedimiento que nos ocupa, la autoridad resolutora se encuentra obligada a individualizar la sanción tomando en cuenta que el *PVEM*, ha cumplido con el Acuerdo INE/CG33/2019 del *Consejo General*.
- Se debe considerar que los quejosos ya no se encuentran en el padrón de afiliados del *PVEM*, que dicho instituto político ha dado de baja inmediata a los ciudadanos que presentaron escrito de renuncia y a los que han presentado queja por indebida afiliación.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como al de rendir alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia, razón por la cual, esta autoridad analizará integralmente los planteamientos expuestos por el denunciado, a la luz de las pruebas que obran en el expediente.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios

que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de la ciudadanía para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹³³

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando

¹³³ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente la ciudadanía puede afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹³⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III de la *Constitución*, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la

¹³⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de la ciudadanía para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las y los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. *Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

1. *Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

a. *En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de PVEMncipios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*

b. *El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renunciar a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar **si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro**, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de la ciudadanía, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre

afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de la ciudadanía, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los soportes necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que la ciudadanía goce de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que las y los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de PVEM

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PVEM, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹³⁵

Estatutos del PVEM

CAPÍTULO II

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- Militante, *ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;*

II.- Adherente, *los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y*

III.- Simpatizante, *los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el

¹³⁵ Consultable en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.*

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- *Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;*

II.- *Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;*

III.- *Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.*

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- *Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Artículo 69.- *Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:*

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

I.- *Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;*

II.- *Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;*

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- *El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.*

Artículo 88.- *El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.*

Artículo 89.- *La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.*

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- *El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.*

Artículo 91.- *De la afiliación de los Militantes;*

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- *Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

I.- Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;

II.- Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y

III.- Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.

Artículo 93.- *El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.*

Artículo 94.- *El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.*

Artículo 95.- *El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:*

I.- El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.

Artículo 96.- *El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 103.- *Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.*

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104.- *El registro de los simpatizantes se realizará en las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, comprendiendo por estos a los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

Artículo 105.- *De conformidad con lo previsto por el artículo 7, base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.*

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave *INE/CG33/2019*, por el cual se aprobó *la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales*” ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

Acuerdo INE/CG33/2019

...

C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN¹³⁶, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

¹³⁶ Partidos Políticos Nacionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.**

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

A C U E R D O

PVEMMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se

lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para

decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.

- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadana o ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este *Consejo General* emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.

En consecuencia, **por regla general, los partidos políticos —El *PVEM*, en el caso en particular—, tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la ciudadana en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria**, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹³⁷ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹³⁸ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹³⁹ y como estándar probatorio.¹⁴⁰

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁴¹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

¹³⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹³⁸ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹³⁹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; PVEMmera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁴⁰ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; PVEMmera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

¹⁴¹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDOa COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por las personas denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de la persona quejosa verse sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad de la persona en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441, de la *LGIFE*, lo que implica, que la persona quejosa tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en la queja que dio lugar al procedimiento ordinario sancionador la persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de

voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y**, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y **aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.**

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**¹⁴² de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues**

¹⁴² Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**¹⁴³
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**¹⁴⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**¹⁴⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**¹⁴⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹⁴⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹⁴⁸

¹⁴³ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

¹⁴⁴ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

¹⁴⁵ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

¹⁴⁶ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

¹⁴⁷ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

¹⁴⁸ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹⁴⁹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,¹⁵⁰ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o

¹⁴⁹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

¹⁵⁰ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

Ahora bien, si una persona refiere que fue su deseo el desafiliarse para no pertenecer más como su miembro o militante de un partido político, y que para ello presentó la correspondiente solicitud de baja o renuncia ante el mismos, el estándar mínimo probatorio que debe aportar para acreditar su dicho, sería, precisamente esa solicitud o petición de baja, con el correspondiente *acuse de recibo*, con el sello de recepción por parte de la instancia partidista que recogió la solicitud o, en su defecto, con el nombre y firma del funcionario que recibió tal petición; lo anterior, con la finalidad de dar certeza del momento preciso en que el órgano interno del partido tuvo conocimiento de ese acto, así como para establecer la temporalidad en que llevó darle trámite y solución a la petición formulada por su militante.

En efecto, una de las formalidades que rigen al procedimiento administrativo sancionador electoral, consiste en que corresponde a la parte actora que afirma determinado hecho controvertido exhibir un mínimo de material probatorio que permita a la autoridad electoral determinar si existen indicios y/o convicción sobre la comisión de los hechos objeto de la denuncia, en este caso, el relativo que ante la presentación del escrito de renuncia del ciudadano, el partido político omitió o se negó a dar trámite a la petición de desincorporación realizada al amparo de un derecho constitucional de desafiliarse a un partido por parte de cualquier ciudadano.

Lo anterior, tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia **16/2011**, de rubro **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS**

DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.

A través de esta tesis, se establece que las denuncias presentadas relacionadas con la vulneración del derecho de afiliación en su vertiente negativa deben estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y **aportar por lo menos un mínimo de material probatorio** a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora o no.

No pasa inadvertido que, si bien esta autoridad goza de la facultad investigadora, lo cierto es que ésta se sustenta, en principio, en la existencia de indicios mínimos sobre los cuales pueda ejercer dicha facultad, mismos que deben ser aportados en el escrito de denuncia por parte del quejoso.

Lo anterior, porque se parte de la base de que la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la **responsabilidad del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y emplazar a los denunciados.**

No obstante, el ejercicio de esta atribución no puede soslayar que, en el particular, corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados y, en su oportunidad, dar la posibilidad a la parte reo de defenderse sobre las imputaciones que se le formulan, las cuales, en el caso, serían precisamente las relativas a la forma en que dio trámite a una solicitud de desafiliación previamente presentada ante sus instancias partidistas.

Por lo expuesto, es indudable que para casos de una probable transgresión al derecho político de libre afiliación en su modalidad negativa —no desafiliación—, la carga probatoria, en principio, corresponde al promovente, a fin de demostrar con elementos probatorios suficientes la comisión de la conducta ilícita, en el caso, la no desafiliación, entendida como la transgresión en su vertiente negativa al derecho de libertad de afiliación que le asiste a cualquier ciudadano en términos de lo previsto en el artículo 41 Constitucional.

Ahora bien, una vez acreditado el hecho relativo a que se presentó ante el instituto político denunciado el escrito de renuncia o desafiliación por parte de la persona

actora, corresponde al partido político demostrar que dio el trámite correspondiente a ese ocurso y que, por ende, desincorporó de sus filias, de manera oportuna, a la o el ciudadano peticionario.

Lo anterior, debido a que la desafiliación es un derecho fundamental cuya disponibilidad no debe quedar a cargo de los partidos políticos, sino exclusivamente de los ciudadanos. Considerar lo contrario, implicaría aceptar que está en poder de los institutos políticos decidir el momento en que queda desafiliado un o una militante, en contravención al ejercicio del derecho fundamental de afiliación y su disponibilidad por parte del ciudadano.

Sobre esta última conclusión, debe tenerse en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la tesis relevante identificada con la clave **XXVI/2016**, de rubro **AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PARTIDO POLÍTICO**¹⁵¹ en la cual determinó que, cuando algún ciudadano o ciudadana ejerce su derecho de separarse de un partido político, a través de la renuncia, **la dimisión a la militancia surte efectos desde el momento de su presentación** ante el partido político de que se trate, **sin necesidad de que sea aceptada material o formalmente por parte del instituto político.**

5. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por las personas quejasas, versan sobre la supuesta transgresión a su derecho de libertad de afiliación en sus modalidades positiva —indebida afiliación— y negativa —no desafiliación—, al ser incorporados y mantenidos en el padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar y continuar con tales afiliaciones.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de la denuncia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

¹⁵¹ Consultable en la liga
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=XXVI/2016&tpoBusqueda=S&sWord=XXVI/2016>

electrónica

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Kevin García Eichner		
Escrito de queja ¹⁵² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵³	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵⁴
10/11/2020	Afiliado 25/10/2016 Registro cancelado 30/11/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Kevin García Eichner.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 25/10/2016, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 25/10/2016.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, en esencia, manifestó que desconoce todos los espacios llenados en el formato de afiliación que proporciona el <i>PVEM</i>, ya que no es su firma ni su letra y en ningún momento dio su consentimiento para que lo afiliaran, solicitando su baja del padrón de afiliados</p> <p>Sin que la misma fuera realizada en los términos del artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, no obstante que en el acuerdo mediante el cual se le dio vista, también se le expuso el contenido de este.</p> <p>3. A partir de lo anterior, se considera que la referida cédula no fue controvertida de manera frontal por la persona denunciante, ya que además no ofreció o aportó medios de prueba para corroborar sus afirmaciones.</p> <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>		

¹⁵² Visible a hoja 01 del expediente.

¹⁵³ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁵⁴ Oficio visible a hojas 185 a 187 y 261 a 263 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Nora Hilda Zavala Ortega		
Escrito de queja¹⁵⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁵⁶	Manifestaciones del Partido Político¹⁵⁷
10/11/2020	Afiliada 05/08/2019 Registro cancelado 30/11/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Nora Hilda Zavala Ortega.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 05/08/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 04/07/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es anterior al registro en el Sistema que administra la <i>DEPPP</i>.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, en esencia, manifestó que desconoce todos los espacios llenados en el formato de afiliación que proporcione el <i>PVEM</i>, ya que no es su firma ni su letra y en ningún momento dio su consentimiento para que lo afiliaran, solicitando su baja del padrón de afiliados</p> <p>Sin que la misma fuera realizada en los términos del artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, no obstante que en el acuerdo mediante el cual se le dio vista, también se le expuso el contenido de este.</p> <p>3. A partir de lo anterior, se considera que la referida cédula no fue controvertida de manera frontal por la persona denunciante, ya que además no ofreció o aportó medios de prueba para corroborar sus afirmaciones.</p> <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>		

¹⁵⁵ Visible a hoja 06 del expediente.

¹⁵⁶ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁵⁷ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Natalia Margarita Campeán Rodríguez		
Escrito de queja¹⁵⁸ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁵⁹	Manifestaciones del Partido Político¹⁶⁰
09/11/2020	<p>Afiliada 30/12/2019</p> <p>Registro cancelado 08/02/2021</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Natalia Margarita Campeán Rodríguez.</p> <p>El <i>PVEM</i>, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo		
Escrito de queja¹⁶¹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁶²	Manifestaciones del Partido Político¹⁶³
09/11/2020	<p>Afiliada 13/06/2019</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>

¹⁵⁸ Visible a hoja 20 del expediente.

¹⁵⁹ Correos electrónicos institucionales de la *DEPPP*, visibles a Hojas 218 a 219 y 312 a 313 del expediente.

¹⁶⁰ Oficio visible a hojas 185 a 187 del expediente.

¹⁶¹ Visible a hoja 77 del expediente.

¹⁶² Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a Hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁶³ Oficios visibles a hojas 185 a 187; 220 a 236 y 1062 a 1094 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

		Al desahogar la vista que le fue formulada con el dictamen pericial, refirió que la afiliación fue voluntaria, pues le fueron entregados los insumos necesarios por parte de la ciudadana para realizar la respectiva afiliación, toda vez que la información necesaria para afiliarla, únicamente pudo ser proporcionada por la propia ciudadana, que no se puede negar la afiliación a persona alguna, porque su firma este mal plasmada, o si la misma es diferente, ya que se deben cuidar los derechos del ciudadano, además de que el dictamen pericial no otorga certeza a la materia de la litis.
Conclusiones		
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, no obstante, la quejosa objetó la autenticidad del documento base del denunciado.</p> <p>En este caso hubo una objeción frontal por parte de la quejosa, en el sentido de desconocer estar afiliada al <i>PVEM</i> y asegurar que nunca ha firmado registro alguno como menciona el denunciado, por lo que si existiera alguna firma al calce de dicho documento o registro solicita la investigación y estudio de la misma con un grafólogo.</p> <p>A partir de lo anterior, la <i>UTCE</i> consideró realizar la prueba pericial en grafoscopia, en donde la persona perita en materia de Grafoscopia y Documentoscopia, propuesta para llevar a cabo dicha pericial, arribo a la siguiente conclusión:</p> <p><i>SEGUNDA: NO CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN A LA C. MARIANA GUADALUPE NAYHELY GONZÁLEZ CASTILLO LA FIRMA DE LA CÉDULA DE AFILIACIÓN CUESTIONADA QUE A SU NOMBRE SE ENCUENTRA ELABORADA LO ANTERIOR POR LAS RAZONES DE INDOLE TÉCNICO VERTIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO AMPLIAMENTE DESCRITO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.</i></p> <p>Debido a lo anterior, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>		

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

César Jiménez Sánchez		
Escrito de queja¹⁶⁴ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁶⁵	Manifestaciones del Partido Político¹⁶⁶
06/11/2020	<p>Afiliado 22/11/2019</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de César Jiménez Sánchez.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 22/11/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 22/11/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria <u>el original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando en se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁶⁴ Visible a hojas 61 a 62 del expediente.

¹⁶⁵ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a Hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁶⁶ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Mariano Moreno Luna		
Escrito de queja ¹⁶⁷ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶⁸	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁹
30/10/2020	Afiliado 31/07/2019 Registro cancelado 30/11/2020	<p style="text-align: center;">Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Mariano Moreno Luna.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 31/07/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 31/07/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. Con la cédula de afiliación aportada por el <i>PVEM</i> se dio vista al denunciante quien señaló que:</p> <ul style="list-style-type: none"> * En ningún momento se afilió al denunciado; * Al verificar el formato de afiliación, el mismo no está escrito con su letra y pulso por lo que está firmado a tercera persona que no conoce, solicitando que se coteje su firma real con su credencial de elector * La fecha que lo afiliaron estaba trabajando como administrativo de la Visitaduría de Palenque, Chiapas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. <p>3. A partir de lo anterior, la <i>UTCE</i> consideró realizar la prueba pericial en grafoscopía, sin embargo, el quejoso omitió desahogar la vista formulada mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, en el sentido de adicionar preguntas al cuestionario con el cual se le corrió traslado, aportar documentos originales y comparecer a la toma de muestras de firmas, en razón de lo anterior, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desierta la pericial en materia de grafoscopía.</p> <p>Debido a lo anterior y toda vez que las simples objeciones no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los formatos de afiliación exhibidos por el <i>PVEM</i>, la conclusión debe ser que la afiliación del ciudadano se realizó conforme las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁶⁷ Visible a hojas 43 a 44 del expediente.

¹⁶⁸ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a Hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁶⁹ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Rosario del Pilar Gómez Pérez		
Escrito de queja¹⁷⁰ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁷¹	Manifestaciones del Partido Político¹⁷²
30/10/2020	<p>Afiliada 11/10/2019</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Rosario del Pilar Gómez Pérez.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 11/10/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 11/10/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁷⁰ Visible a hojas 43 a 44 del expediente.

¹⁷¹ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁷² Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Moisés Gómez Méndez		
Escrito de queja ¹⁷³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁴	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁵
06/11/2020	Afiliado 22/03/2019 Registro cancelado 30/11/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Moisés Gómez Méndez.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 22/03/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 22/03/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁷³ Visible a hojas 70 a 71 del expediente.

¹⁷⁴ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁷⁵ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez		
Escrito de queja ¹⁷⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁷	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁸
06/11/2020	Afiliada 15/10/2019 Registro cancelado 30/11/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 15/10/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 28/04/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es anterior al registro en el Sistema que administra la <i>DEPPP</i>.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁷⁶ Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹⁷⁷ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁷⁸ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz		
Escrito de queja¹⁷⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁸⁰	Manifestaciones del Partido Político¹⁸¹
06/11/2020	Afiliada 15/10/2019 Registro cancelado 30/11/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 15/10/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante sin fecha.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

María Guadalupe López Olmedo		
Escrito de queja¹⁸² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁸³	Manifestaciones del Partido Político¹⁸⁴
06/11/2020	Afiliada 15/10/2019	Fue afiliada

¹⁷⁹ Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹⁸⁰ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁸¹ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

¹⁸² Visible a hojas 29 a 30 del expediente.

¹⁸³ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁸⁴ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

	Registro cancelado 06/11/2020	<p>Informó que la ciudadana sí aparecía registrada en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta de María Guadalupe López Olmedo y que fue dada de baja de su padrón de militantes.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
--	---	--

Conclusiones

1. La *DEPPP* informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación **15/10/2019**, mientras que *PVEM* aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha **15/10/2019**.

2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna.

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del *PVEM*, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que **la afiliación de la ciudadana se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

Siomara Paola Rentería Lugo		
Escrito de queja¹⁸⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>¹⁸⁶	Manifestaciones del Partido Político¹⁸⁷
05/11/2020	<p>Afiliada 13/11/2016</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que la ciudadana sí aparecía registrada en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta de Siomara Paola Rentería Lugo y que fue dada de baja de su padrón de militantes.</p>

¹⁸⁵ Visible a hojas 142 a 143 del expediente.

¹⁸⁶ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁸⁷ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 290 a 292 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

		Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones		
<p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 13/11/2016, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 20/10/2019, advirtiéndose que la cédula de afiliación se recabo durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, en esencia, manifestó que no fue afiliada voluntariamente.</p> <p>Sin que dicha objeción fuera realizada en los términos del artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, no obstante que en el acuerdo mediante el cual se le dio vista, también se le expuso el contenido de este.</p> <p>3. A partir de lo anterior, se considera que la referida cédula no fue controvertida de manera frontal por la persona denunciante, ya que además no ofreció o aportó medios de prueba para corroborar sus afirmaciones.</p> <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>		

Ademaida Garcilazo Ambris		
Escrito de queja ¹⁸⁸ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ¹⁸⁹	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁰
05/11/2020	<p>Afiliada 12/11/2019</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Ademaida Garcilazo Ambris.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p> <p>Al desahogar la vista que le fue formulada con el dictamen pericial, refirió que la afiliación fue voluntaria, pues le fueron entregados los insumos necesarios por parte de la ciudadana</p>

¹⁸⁸ Visible a hoja 11 del expediente.

¹⁸⁹ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁹⁰ Oficios visibles a hojas 185 a 187, 220 a 236 y 1062 a 1094 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

		para realizar la respectiva afiliación, toda vez que la información necesaria para afiliarla, únicamente pudo ser proporcionada por la propia ciudadana, que no se puede negar la afiliación a persona alguna, porque su firma este mal plasmada, o si la misma es diferente, ya que se deben cuidar los derechos del ciudadano, además de que el dictamen pericial no otorga certeza a la materia de la litis.
--	--	---

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del *PVEM*, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria **el original** del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, no obstante, la quejosa objetó la autenticidad del documento base del denunciado.

En este caso la quejosa objeta la autenticidad de las pruebas, su alcance y valor probatorio, señalando que en ningún momento ha estado afiliada o ha sido militante del *PVEM*, además de desconocer la firma y letra del documento aportado por el denunciado.

A partir de lo anterior, la *UTCE* consideró realizar la prueba pericial en grafoscopia, en donde la persona perita en materia de Grafoscopia y Documentoscopia, propuesta para llevar a cabo dicha pericial, arribo a la siguiente conclusión:

PRIMERA: NO CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN A LA C. ADEMAIDA GARCILAZO AMBRIS LA FIRMA QUE A SU NOMBRE SE ENCUENTRA ELABORADA EN LA CÉDULA DE AFILIACIÓN CUESTIONADA LO ANTERIOR POR LAS RAZONES DE INDOLE TÉCNICO VERTIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO AMPLIAMENTE DESCRITO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.

En razón de lo anterior, la conclusión debe ser que **se trata de una afiliación indebida.**

Silvia Carolina Valdez Marín		
Escrito de queja ¹⁹¹ (Recepción en <i>UTCE</i>)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ¹⁹²	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹³
05/11/2020	Afiliada 06/04/2019 Registro cancelado 30/11/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.

¹⁹¹ Visible a hoja 125 del expediente.

¹⁹² Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁹³ Oficio visible a hojas 185 A 187 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

		De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Silvia Carolina Valdez Marín. El <i>PVEM</i> , no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

Rosa Abilene Mireles Castañeda		
Escrito de queja ¹⁹⁴ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁹⁵	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁶
05/11/2020	Afiliada 01/09/2019 Registro cancelado 30/11/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Rosa Abilene Mireles Castañeda.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 01/09/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 01/09/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. Con la cédula de afiliación aportada por el <i>PVEM</i> se dio vista a la denunciante quien señaló que:</p> <p>* Objeta la autenticidad del formato de afiliación dado que la firma que se encuentra al calce no es suya, se trata de una firma diversa que se intentó suplantar por la suya, es decir, es falsa.</p>		

¹⁹⁴ Visible a hojas 151 a 152 del expediente.

¹⁹⁵ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁹⁶ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

* Para acreditarlo adjunta copia fotostática de su credencial para votar y ofrece la prueba de inspección que habrá de desahogar el departamento de la Unidad Técnica de servicios de informática o quien corresponda del *INE*, el cual habrá de inspeccionar lo siguiente: La base de datos digitales donde se encuentran los datos de su registro, para que haga constar que en la misma, se encuentra registrada su firma, a efecto de que se coteje la firma que se encuentra al calce de la documental impugnada y la que se encuentra en esa base de datos y efectúe conclusión respecto si hay similitud entre la una y la otra.

3. A partir de lo anterior, la *UTCE* consideró realizar la prueba pericial en grafoscopia, sin embargo, la quejosa omitió desahogar la vista formulada mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, en el sentido de adicionar preguntas al cuestionario con el cual se le corrió traslado, aportar documentos originales y comparecer a la toma de muestras de firmas, en razón de lo anterior, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desierta la pericial en materia de grafoscopia.

En razón de lo anterior y toda vez que las simples objeciones no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los formatos de afiliación exhibidos por el *PVEM*, la conclusión debe ser que **la afiliación de la ciudadana se realizó conforme las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

Andrés Alba Talamantes		
Escrito de queja ¹⁹⁷ (Recepción en <i>UTCE</i>)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ¹⁹⁸	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁹
05/11/2020	Afiliado 01/08/2019 Registro cancelado 30/11/2020	Fue afiliado Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Andrés Alba Talamantes. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones		
1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 01/08/2019 , mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 01/08/2019 , advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.		

¹⁹⁷ Visible a hojas 151 a 152 del expediente.

¹⁹⁸ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

¹⁹⁹ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del *PVEM*, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que **la afiliación del ciudadano se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

Rosa Emma García Ramírez		
Escrito de queja ²⁰⁰ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ²⁰¹	Manifestaciones del Partido Político ²⁰²
06/11/2020	Afiliada 11/09/2019 Registro cancelado 30/11/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Rosa Emma García Ramírez. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>1. La <i>DEPPP</i> informó que la denunciante fue registrada con fecha de afiliación 10/11/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 26/11/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es posterior al registro realizado ante la DEPPP por 15 días.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, señaló:</p> <p>* Objeta la autenticidad de la prueba y valor probatorio, el documento presentado no corresponde a su letra, la información esta remarcada y los datos que presentan, no son legítimos.</p> <p>* Dentro del campo de escolaridad colocaron secundaria, mientras que su grado de escolaridad corresponde a licenciatura concluida</p>		

²⁰⁰ Visible a hoja 84 del expediente.

²⁰¹ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a Hojas 218 a 219 del expediente.

²⁰² Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 317 a 329 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

En el caso no existió una objeción frontal en términos del artículo 24 del *Reglamento de Quejas*, por lo cual no se consideró necesario ordenar el desahogo de alguna prueba pericial.

No obstante, se considera que en atención a que el registro ante la *DEPPP* es anterior a la fecha en que presuntamente se generó la cédula de afiliación, sin que se actualice alguna justificación como sería la aplicación del acuerdo INE/CG33/2019, se considera que se está ante la presencia de **una afiliación indebida**.

Juan Pedro Ruelas Franco		
Escrito de queja ²⁰³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ²⁰⁴	Manifestaciones del Partido Político ²⁰⁵
05/11/2020	Afiliado 14/10/2016 Registro cancelado 30/11/2020	Fue afiliado Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Juan Pedro Ruelas Franco . El <i>PVEM</i>, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación del quejoso.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue registrado como afiliado del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

²⁰³ Visible a hojas 93 a 94 del expediente.

²⁰⁴ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

²⁰⁵ Oficio visible a hojas 185 a 187 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Mariel Torres Ortiz		
Escrito de queja²⁰⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP²⁰⁷	Manifestaciones del Partido Político²⁰⁸
06/11/2020	<p>Afiliada 12/02/2019</p> <p>Registro cancelado 04/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Mariel Torres Ortiz.</p> <p>El <i>PVEM</i>, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación del quejoso.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

Jorge Eduardo Hemkes Moreno		
Escrito de queja²⁰⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP²¹⁰	Manifestaciones del Partido Político²¹¹
06/11/2020	<p>Afiliado 24/10/2016</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el ciudadano sí aparecía registrado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta de Jorge Eduardo Hemkes Moreno y que fue dado de baja de su padrón de militantes.</p>

²⁰⁶ Visible a hojas 99 a 100 del expediente.

²⁰⁷ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

²⁰⁸ Oficio visible a hojas 185 a 187 del expediente.

²⁰⁹ Visible a hojas 99 a 100 del expediente.

²¹⁰ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

²¹¹ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 220 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

		Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones		
<p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 24/10/2016, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación del denunciante con fecha 24/10/2016, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p> <p>2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando en se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Olimpia Pérez Mendoza		
Escrito de queja ²¹² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ²¹³	Manifestaciones del Partido Político ²¹⁴
05/11/2020	<p>Afiliada 25/11/2019</p> <p>Registro cancelado 30/11/2020</p>	<p style="text-align: center;">Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Olimpia Pérez Mendoza.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de la quejosa.</p>
Conclusiones		
<p>1. La <i>DEPPP</i> informó que el denunciante fue registrado con fecha de afiliación 25/11/2019, mientras que <i>PVEM</i> aportó cédula de afiliación electrónica del denunciante con fecha 25/11/2019, advirtiéndose que la fecha de la cédula de afiliación es idéntica en ambos casos.</p>		

²¹² Visible a hoja 135 del expediente.

²¹³ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 218 a 219 del expediente.

²¹⁴ Oficios visibles a hojas 185 a 187 y 259 a 260 del expediente.

2. En el procedimiento la autoridad tramitadora dio vista a la persona quejosa con la cédula de afiliación, quien, no realizó manifestación alguna al respecto.

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del *PVEM*, que el partido político aportó impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de la quejosa, que la *DERFE* confirmó que dicha afiliación fue mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, que en el referido documento se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento) se debe concluir que **la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

Las constancias aportadas por la *DEPPP* y *DERFE*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del Reglamento de Quejas, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

6. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las y los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

De ser éste el caso, es menester verificar que tal situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico, —partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral— es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la persona quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las y los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a éstos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Así, como vimos, en el apartado HECHOS ACREDITADOS, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que las personas denunciadas, se encontraron como afiliadas del *PVEM*.

Por otra parte, el citado denunciado no demuestra con medios de prueba idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las personas quejasas, en los cuales, ellas mismas, motu proprio, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político —con excepción de los supuestos que más adelante se detallarán—.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PVEM*, en tanto que el dicho de las y los denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliados —modalidad positiva—, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba; en tanto que el partido político, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplió las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tiene el deber de probar esa situación.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar mediante los medios idóneos esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del MARCO NORMATIVO de la presente Resolución, así como en el correspondiente a CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para toda la ciudadanía de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, emitidos por el propio *INE* en la Resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional en nuestro País desde hace décadas, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de una persona para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— siendo ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, o demostrar que dieron cauce legal a las solicitudes de desafiliación de manera pronta y oportuna y, que derivado de ello, ya no se encuentran en sus registros de militantes —para el caso de la omisión o negativa de atender solicitudes de desafiliación—.

En conclusión, toda vez que las y los denunciantes manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiados al partido; que está comprobada la afiliación de todos, y que el *PVEM*, no cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se solicitó voluntariamente, tal y como se expondrá más adelante, esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las y los quejosos y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Lo anterior, con excepción de los casos en los que el *PVEM* demostró, con el medio de prueba conducente, que la afiliación respectiva fue el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las personas quejosas, en los que, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político.

Precisado lo anterior, el estudio de fondo del presente asunto se realizará en dos apartados, uno por cuanto hace a las personas de quienes se considera que no fueron afiliadas indebidamente al *PVEM*, y otro de los supuestos en los que se determinó que se violentó el derecho de libre afiliación de éstas.

Apartado A. Personas de quienes el *PVEM* no conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **las personas que a continuación se citan**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PVEM* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

No.	Persona denunciante
1	Kevin García Eichner
2	Nora Hilda Zavala Ortega
3	César Jiménez Sánchez
4	Mariano Moreno Luna
5	Rosario Del Pilar Gómez Pérez
6	Moisés Gómez Méndez
7	Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez
8	Lizbeth Sarai Rodríguez Ruiz
9	María Guadalupe López Olmedo
10	Siomara Paola Rentería Lugo
11	Rosa Abilene Mireles Castañeda
12	Andrés Alba Talamantes
13	Jorge Eduardo Hemkes Moreno
14	Olimpia Pérez Mendoza

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas el *PVEM*, en todos los casos que aquí se analizan, ofreció como medio de prueba para sustentar la debida afiliación de las y los ciudadanos, **los originales de los respectivos formatos de afiliación**, acompañados con copia de la credencial para votar de estos, salvo en el caso de Olimpia Pérez Mendoza, en el que el partido político denunciado, exhibió impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación captada mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, en la cual, se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada, medios de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como

en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones controvertidas.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho que se trata de documentales privadas que *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pues apreciadas en su contexto y concatenadas con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, ya que fueron el resultado de la manifestación libre y voluntaria de las y los quejosos, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que los mismos imprimieron en dichos formatos.

De este modo, esta autoridad resolutora engarzó una cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas, consistentes en los originales de los formatos de afiliación de las personas antes precisadas, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad de los quejosos (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción o falta de objeción eficaz de esos formatos.

En este tenor, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y el derecho de audiencia de las personas denunciantes, la autoridad instructora, en cumplimiento a lo establecido en el *Manual*, dio vista a éstas a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con las respectivas cédulas de afiliación que, para cada caso, aportó el *PVEM*, conforme a lo siguiente:

Acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno

*Mediante Acuerdo identificado con la clave **INE/CG189/2020**, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el **Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021**, que en su **Anexo 5** denominado **Procedimiento para la Compulsa de la credencial de elector**, señala, en lo conducente lo siguiente:*

En caso de que las diligencias de investigación se desprendan que el partido político correspondiente aportó documentos que acrediten la afiliación, la UTCE avisará a la o el aspirante afectado para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en un plazo de 3 días.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

*Por lo anterior, y toda vez que el Partido Verde Ecologista de México proporcionó documentación relacionada con la afiliación de **Moisés Gómez Méndez, César Jiménez Sánchez, Rosario Del Pilar Gómez Pérez, Mariano Moreno Luna, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Jorge Eduardo Hemkes Moreno, Nora Hilda Zavala Ortega, Ademaida Garcilazo Ambris, Olimpia Pérez Mendoza, Kevin García Eichner, Siomara Paola Rentería Lugo, Rosa Abilene Mireles Castañeda, Andrés Alba Talamantes, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, María Guadalupe López Olmedo y Rosa Emma García Ramírez**, se ordena dar vista a dichas personas quejasas, con copia simple de los formatos únicos de afiliación y actualización al registro partidarios de ese instituto político y documentos que los acompañan, a efecto de que, dentro del plazo improrrogable de **tres días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de éstos.*

Al efecto, es necesario precisar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se les corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24 [Se transcribe]

Dicha diligencia fue desahogada como ya quedado reseñado con antelación.

Sin que sea óbice señalar que, en la etapa de alegatos, el expediente citado al rubro se puso a disposición de las partes denunciantes, en cuyas constancias se encuentran los documentos base del partido político; lo anterior, a fin de que, en dicha etapa procesal, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En este orden de ideas, se procede al análisis de cada caso en particular.

- **9 personas. César Jiménez Sánchez, Rosario del Pilar Gómez Pérez, Moisés Gómez Méndez, Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez, Lizbeth Saraí Rodríguez Ruiz, María Guadalupe López Olmedo, Andrés Alba Talamantes, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Olimpia Pérez Mendoza.**

Como se ha precisado, las personas antes citadas fueron omisas en responder tanto a la vista que les fue formulada por la *UTCE*, en la que se les corrió traslado con el formato de afiliación, así como para formular alegatos en los que se combatiera frontalmente la cédula de afiliación; por lo que hicieron nulo su derecho de realizar

las manifestaciones que estimaran pertinentes y, en su caso, de desvirtuar el medio de prueba exhibido.

En efecto, de lo antes referido, es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando las personas denunciantes tuvieron las oportunidades procesales de objetar la autenticidad y contenido de la respectiva cédula de afiliación, se abstuvieron de cuestionarlas, pues no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido.

En este sentido, al no haber oposición alguna de las partes actoras en relación con los documentos exhibidos por el *PVEM*, es válido colegir que existe un reconocimiento tácito de éstas de haber suscrito y firmado dichos comprobantes, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliadas al partido denunciado.

En tal virtud, se debe precisar que el derecho de contradicción probatoria no es más que la posibilidad de las partes de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, y de ser el caso, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.

Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de estas personas, haya sido producto de una acción ilegal por parte del *PVEM* pues como se dijo, los formatos originales de afiliación aportados por el denunciado, no fueron controvertidos u objetados de manera frontal y directa, no obstante que estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho.

Así pues, no obstante, las oportunidades procesales que tuvieron las y los denunciantes de refutar el documento base que, para cada caso, aportó el *PVEM* para acreditar que sí medió la voluntad libre y expresa de éstos que querer pertenecer a las filas de agremiados de dicho ente político, lo cierto es que no hicieron valer ese derecho de contradicción dentro del procedimiento.

- **3 Personas.** Kevin García Eichner, Nora Hilda Zavala Ortega y Siomara Paola Rentería Lugo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

En efecto, por cuanto hace a estas personas, al responder a la vista que se les dio con el documento base exhibido por el partido político, manifestaron lo siguiente:

Kevin García Eichner

Vista

Por mi propio derecho expongo que desconozco todos los espacios llenados en el formato de afiliación que da a conocer el partido, ya que no es mi firma ni mi letra y en ningún momento di mi consentimiento para que me afiliaran, por lo cual solicito me den de baja de su padrón de afiliados.

Nora Hilda Zavala Ortega

Vista

Yo Nora Hilda Zavala Ortega, desconozco el llenado de todos y cada uno de los espacios del formato que proporciona el partido Verde Ecologista de México por lo cual solicito se me dé baja de su lista de afiliados.

Siomara Paola Rentería Lugo

Vista

Hago constar y bajo protesta de decir la verdad que yo no he sido afiliada bajo mi propia voluntad al partido político (Partido Verde) tampoco he sido dirigente en ningún sentido.

De las manifestaciones antes relatadas, se advierte que él y las denunciantes, cuyo caso aquí se analiza expresan oposición a dicho documento, al referir, entre otras cuestiones que desconocen la afiliación, el haber llenado el respectivo formato, la letra y firma, solicitan la baja del padrón de militantes del partido, que los datos de la cédula no son legítimos.

Sin embargo, debe precisarse que tales declaraciones se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establecieron las razones concretas que, en su caso, apoyaran sus respectivas objeciones, ni tampoco aportaron los elementos idóneos para acreditar sus manifestaciones, lo anterior, con la finalidad de invalidar la fuerza probatoria de las pruebas aportadas por el denunciado, por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas.

En ese sentido, si una de las partes se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la contraparte, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni aporta elementos para acreditar su dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento.

Por tanto, si las partes denunciantes objetaron los formatos de afiliación aportados por el *PVEM*, al referir que desconocen la afiliación, el haber llenado el respectivo formato, la letra y firma, así como los datos de la cédula, debieron especificar las razones concretas en que apoyaban su argumento, así como aportar los elementos probatorios idóneos para tratar de acreditar su dicho; además debieron especificar los motivos precisos que consideraban al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor del documento aportado, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

En efecto, no basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones en que apoyaban la misma y **aportar los elementos idóneos para acreditarlas**, para lo cual, no solo debieron indicar el aspecto que no reconocían, o el por qué no podía ser valorada positivamente por la autoridad, sino que debieron aportar los medios de prueba que estimaran conducentes, tendentes a acreditar que efectivamente las firmas contenidas en los formatos de afiliación exhibido por el *PVEM* no era la de ellos, como podría ser, algún documento en el que se hubiera estampado su rúbrica, la pericial en materia de grafoscopia o cualquier otra que consideraran oportuna, pero no lo hicieron.

- **2 Personas. Mariano Moreno Luna y Rosa Abilene Mireles Castañeda**

Ahora bien, en los casos **Mariano Moreno Luna y Rosa Abilene Mireles Castañeda**, al momento de desahogar la vista que les fue formulada, manifestaron:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Mariano Moreno Luna

Vista

En contestación del oficio INE/CHIS/05JDE/VE/0606/2021 del Exp. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020, declare decir la verdad que en ningún momento me afilié al partido Verde Ecologista de México, al verificar el formato Campaña de Actualización de Afiliación 2019 con folio 2019-07-053468 y con fecha 31-07-2019, no esta escrito bajo mi letra y pulso, por tanto esta firmado a tercera persona que no la conosco y pido que se coteje mi firma real con mi credencial de elector, a su vez con la fecha que me afiliaron estaba trabajando como administrativo de la Visitaduría de Palenque, Chiapas; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Programa Jovenes Construyendo El futuro.

Rosa Abilene Mireles Castañeda

Vista

Con fundamento en el artículo 24 del reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, objeto la prueba documental ofrecida por el Partido Verde Ecologista de México al momento de desahogar el requerimiento formulado por esta unidad técnica, al tenor siguiente:

Objeto la autenticidad de la prueba documental consistente en el formato de afiliación de folio 2019-32-14021 de fecha 01 de septiembre de 201, dado que la firma que se encuentra al calce no es la mi, se trata de una firma diversa que se intentó suplantar por la mía es decir la firma es falsa hecha pasar por la de exponente, para acreditarlo adjunto copia fotostática de mi credencial para votar con clave de elector XXXXXXXX; y, ofrezco la prueba de inspección que habrá de desahogar el departamento de unidad técnica de servicios de informática o quien corresponda del Instituto Nacional Electoral, el cual habrá de inspeccionar o verificar lo siguiente: la base de datos digitales donde se encuentran los datos de mi registro para que haga constar que en esa base se encuentra registrada mi firma; para que, hecho lo anterior, coteje la firma que se encuentra al calce de la documental que se impugna y la que se encuentra en esa base de datos; y, para que efectué conclusión respecto a si hay similitud entre la una y la otra.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

De las manifestaciones antes relatadas, se advierte que la y el denunciante, cuyos casos aquí se analizan expresaron oposición a dicho documento, al referir, entre otras cuestiones, que desconocen la afiliación y que la firma fue falsificada.

A partir de lo anterior, la autoridad instructora consideró necesario el desahogo de una **pericial en grafoscopía**, a efecto de tener mayores elementos encaminados a determinar si medió la voluntad de la denunciante para suscribir el citado documento.

En virtud de lo anterior, por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, se requirió a **Mariano Moreno Luna y Rosa Abilene Mireles Castañeda** a efecto de que en el plazo improrrogable de **tres días hábiles**, aportaran algunos **documentos originales** y se presentara ante la Junta Local o Distrital más cercana a su domicilio, a efecto de que funcionarios de dichos órganos **tomaran las muestras de las firmas necesarias para el desahogo de la prueba pericial** respectiva, apercibidos que en caso de **no comparecer dentro del plazo previamente señalado, se tendrá por desierta la prueba y se resolverá con las constancias que obren en autos.**

En el mismo acuerdo, también se les dio vista con un cuestionario, que en su momento procesal oportuno sería sometido a consideración del perito en grafoscopía, a efecto de que, de ser el caso, adicionara las preguntas que considerara pertinentes.

El citado acuerdo fue notificado en los términos siguientes:

Persona notificada	Notificación personal	Respuesta
Mariano Moreno Luna	Cédula 01 de febrero de 2022 Plazo del 02 al 04 de febrero de 2022.	Sin respuesta
Rosa Abilene Mireles Castañeda	Cédula 02 de febrero de 2022 Plazo del 03 al 07 de febrero de 2022.	Sin respuesta

No obstante haber sido debidamente notificadas las personas denunciantes, omitieron desahogar la vista formulada, por lo tanto, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, **se hizo efectivo el apercibimiento** formulado en el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, **se tuvo por desierta la prueba pericial en grafoscopía.**

En ese sentido, toda vez que dichas objeciones no puede concatenarse con la pericial en comento, **no son susceptibles de restar valor a las cédulas de afiliación proporcionadas** por el *PVEM*.

Por tanto, si la y él denunciante indicaron que los formatos afiliación aportados por el *PVEM* no fueron firmados por estos, debieron especificar las razones concretas en que apoyaban su argumento, así como **aportar y desahogar en tiempo y forma los elementos probatorios idóneos para tratar acreditar su dicho**; además debieron especificar los motivos precisos que consideraban al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor de los documentos aportados, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia sus objeciones no son susceptibles de ser atendidas por esta autoridad.

En efecto, no basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones en que apoyaban la misma y **aportar los elementos idóneos para acreditarlas**, para lo cual, no solo debieron indicar el aspecto que no reconocían, o el por qué no podía ser valorada positivamente por la autoridad, sino que debieron desahogar en tiempo y forma los medios de prueba que estimaran conducentes, tendentes a acreditar que efectivamente la firma contenida en el formato de afiliación exhibido por el *PVEM* no era de estos, pero no lo hicieron, tal y como ha quedado detallado previamente.

Por tanto, en virtud de que sus respectivos alegatos se desarrollaron en torno a que la firma ahí contenida no era la suya y que, incluso, el documento no era veraz, la prueba idónea para refutar la misma y, en el caso, para acreditar su dicho, lo era la pericial en materia de grafoscopía tal y como ha sido establecido en las Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11²¹⁵ de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS** e III.1o.C. J/29,²¹⁶ de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**.

²¹⁵ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del PVEMmer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

²¹⁶ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, PVEMmer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

En síntesis, **Mariano Moreno Luna y Rosa Abilene Mireles Castañeda**, si bien realizaron manifestaciones en relación a los formatos de afiliación, también lo es que, no cumplieron con desahogar en tiempo y forma la información que les fue solicitada para el debido desarrollo de la prueba pericial en grafoscopia, por lo que se considera que **dichas objeciones no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los formatos de afiliación exhibidos por el PVEM.**

En cuanto a **Kevin García Eichner y Nora Hilda Zavala Ortega**, a pesar de que manifiestan no haber llenado el formato de referencia, incluso el primero de estos desconoce la firma y letra, lo cierto es tampoco ofrecieron y mucho menos aportaron a la controversia elemento de convicción alguno que soportara su dicho.

Respecto a **Siomara Paola Rentería Lugo**, únicamente refiere que no fue afiliada por voluntad propia y que no ha sido dirigente en ningún sentido, es decir, se tratan de argumentos genéricos y en ningún momento están encaminados a desvirtuar u objetar el alcance probatorio o el contenido del formato de afiliación respectivo.

De tal manera, debe concluirse que las partes denunciantes, cuyo caso se analiza en este apartado, faltaron a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar aquellas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción de los documentos bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que su firma es distinta de la que calza la constancia de afiliación, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **1a./J. 12/2012 (10a.)** de rubro y contenido siguientes:²¹⁷

OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento PVEMvado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en

²¹⁷ Consultable en la liga electrónica <http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000608&Clase=DetalleTesisBL&Semana=0>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de caPVEMcho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.

En consecuencia, toda vez que las manifestaciones de las y los promoventes no son suficientes para desacreditar las documentales exhibidas por el PVEM, en cuanto a su existencia, contenido, valor y alcance probatorio, se concluye que el denunciado sí acreditó con la prueba idónea, que la afiliación de las personas denunciadas se efectuó mediando la voluntad de éstas para afiliarse a sus filas y, por tanto, su incorporación al padrón de militantes del partido se hizo conforme a sus estatutos.

Bajo esta óptica, resulta claro que si las partes actoras sostuvieron la falsedad del formato de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del PVEM, asumieron una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso el documento cuestionado) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En consecuencia, si las partes denunciadas no satisficieron esa carga al no ofrecer medio de prueba alguno, entonces, resulta dable tener por cierta el documento cuestionado y consecuentemente como lícita la afiliación del que el quejoso se duele.

En tal virtud, si bien es cierto que realizaron las manifestaciones que estimaron idóneas para restar fuerza probatoria a la documental aportada por el denunciado, lo cierto es que faltaron a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar elementos probatorios que restaran valor al documento bajo análisis, lo cual resulta insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Por tanto, la conclusión a la que se llega es que, el *PVEM* sí acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de las partes quejasas de incorporarse como militantes de ese partido político, y para ello suscribieron y firmaron el formato de afiliación que, al efecto, aportó el partido; por tanto, el denunciado sí realizó la afiliación de estas de conformidad con sus procedimientos internos.

Por todo lo anterior, y a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que la afiliación de las **catorce personas denunciantes** al *PVEM* fue apegada a derecho, por lo que, puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Así, la cadena de indicios mencionada no resultó fragmentada por la omisión y manifestaciones de las referidas personas, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las partes quejasas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de denuncia, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En conclusión, a partir de los razonamientos previamente establecidos, esta autoridad considera que las afiliaciones de dichas personas fueron apegadas a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la *LGPP* en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) y y) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación de estas personas al *PVEM*, sino también la ausencia de voluntad de las mismas para ser afiliadas, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se justificó la afiliación de las partes denunciantes sin evidenciar la ausencia de voluntad de las mismas en esos actos, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *LGPP*, ya que al concluirse que las personas quejasas se afiliaron libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PVEM* no utilizó indebidamente la información y datos personales de los impetrantes, porque estos, en su oportunidad, consintieron afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente resolución, era menester proporcionar al partido político esa información y los documentos atinentes.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PVEM* sanción alguna.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Similar consideración estableció el Consejo General, entre otras, en las determinaciones INE/CG471/2020 e INE/CG475/2021, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves UT/SCG/Q/YGDC/JD01/QROO/60/2019 y UT/SCG/Q/CAVP/JD09/JAL/174/2020, respectivamente.

Ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad de las y los ciudadanos para afiliarse voluntariamente a un partido político, **no fue transgredido** por el PVEM, toda vez que acreditó con las documentales idóneas, que la afiliación de estas personas se efectuó mediando la voluntad de las mismas para afiliarse a sus filas y, por tanto, su incorporación al padrón de militantes del partido se hizo conforme a sus estatutos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes:

DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.** Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

Es por ello que, **se tiene por no acreditada la infracción** en el procedimiento sancionador ordinario, consistente en la supuesta violación al derecho político de

libre afiliación de **las catorce personas denunciantes**, cuyos casos se analizaron en el presente apartado, por los argumentos antes expuestos.

Ahora bien, más allá de que se tiene por no acreditada la infracción imputada a *PVEM*, es importante precisar que las personas quejasas, en su oportunidad, fueron dadas de baja del padrón de afiliados de partido político denunciado, como se advierte de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora.

Apartado B. Personas de quienes el *PVEM* conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

Como ha quedado precisado el *PVEM* reconoció la afiliación de **Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco, Rosa Emma García Ramírez y Mariel Torres Ortiz**; situación que fue corroborada por la *DEPPP*, que, además, proporcionó la fecha en que estas personas fueron afiliadas al partido:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	30/12/2019
2	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	13/06/2019
3	Ademaida Garcilazo Ambris	12/11/2019
4	Silvia Carolina Valdez Marín	06/04/2019
5	Rosa Emma García Ramírez	11/09/2019
6	Juan Pedro Ruelas Franco	14/10/2016
7	Mariel Torres Ortiz	12/02/2019

No obstante, al tratarse de razones diferentes por las cuales esta autoridad considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de las quejasas y el quejoso precisados previamente, el estudio se realizará en tres subapartados.

B.1 NO SE APORTÓ DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA VOLUNTAD DE AFILIACIÓN

El **PVEM** no aportó documento alguno del cual fuera posible desprender que la afiliación de Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz, se realizó de forma individual, voluntaria, personal, pacífica y en los términos establecidos en su normativa interna.

Por lo que, ante la falta de documentación idónea que permita acreditar de manera fehaciente la voluntad de las quejas y el quejoso de referencia para afiliarse al partido político denunciado, existe evidencia que hace suponer que dichas afiliaciones fueron producto de una acción ilegal por parte del **PVEM**.

En efecto, como se demostró anteriormente, Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz, aparecieron afiliados al **PVEM**, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior pues en los cuatro casos analizados, el denunciado no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichas personas hubieran dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hubieran permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, y ante la negativa de los denunciados de haberse afiliado al **PVEM**, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de **pruebas idóneas**, que las afiliaciones se llevaron a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las y los hoy promoventes, lo que no hizo en ningún caso.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al **PVEM** implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que

podiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz, sobre los que se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente demostrado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por lo anterior, en el presente procedimiento ordinario sancionador se considera que **le asiste la razón a Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, al haberse acreditado plenamente la responsabilidad del *PVEM* relacionada con la indebida afiliación de los citados quejosos materia de pronunciamiento en este procedimiento.

B.2 LAS FIRMAS PLASMADAS EN LOS FORMATOS DE AFILIACIÓN NO FUERON PLASMADAS POR LAS DENUNCIANTES

De las constancias que obran en el expediente se advierte que el *PVEM* aportó el original de las cédulas de afiliación de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris.

En atención a la vista que les fue formulada con las cédulas de afiliación proporcionadas por el *PVEM*, las quejosas manifestaron en lo conducente, lo siguiente:

Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo

...

Así es que yo Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo por lo antes expuesto y en respuesta a dicha imputación hago de su conocimiento que voy a proceder legalmente con una demanda al Partido Verde Ecologista por que yo no reconozco estar afiliada a dicho partido, por falsedad de declaraciones en cuanto a aseverar y/o afirmar que yo estoy inscrita y adherida a dicho partido, por lo cuál yo solicito se me presente comprobante de mi firma en el cuál yo acepté pertenecer a dicho partido como militante, no si bien antes hacer mención que aseguro fehacientemente que nunca he firmado un registro tal al se menciona, por lo que si existiera firma alguna al calce de dicho documento o

registro solicitaré sin duda alguna la investigación y el estudio de tal firma con un grafólogo.

...

Ademaida Garcilazo Ambris

...

1. *El día 29 (veintinueve) del mes de marzo de 2021 (dos mil veintiunos) me fue notificado en mi domicilio El Procedimiento Sancionador Ordinario que sigue la parte Denunciante representada por KEVIN GARCIA EICHNER y Otros contra la parte Denunciada PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.*
2. *Se me informo que como parte quejosa tenía 3 días hábiles para manifestarme conforme a mi derecho convenga.*
3. *Vengo a manifestarme y Objetar la autenticidad de las pruebas, su alcance y valor probatorio toda vez que en Ningún momento he estado afiliada o ser militante del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, ni de ningún otro partido político.*
4. *No reconozco mi firma, es apócrifa.*
5. *No es mi letra. Nunca he llenado una cédula de afiliación a dicho partido, ni ha sido mi decisión Pertenecer.*
6. *Existe la presunción humana que no conocen mi persona, toda vez que asientan que mi nivel de estudios es preparatoria, cuando en realidad mi grado de estudios es Licenciatura en Derecho, y cuento con el grado de Maestría en Educación Con Especialidad en Docencia. Acreditando estos hechos con documentales públicas mismos que se anexan a la presente.*
7. *Es probable que la derivación del presente expediente se deba a que cuento con los programas sociales del municipio de DESPENSA BÁSICA, SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES DE AGUA. Hecho que en ocasiones nos solicitan copia simple de la credencial expedida por el INE. Son Programas sociales que no están sujetos a partidismos políticos.*

...

Como se precisó previamente, el medio de prueba idóneo para sustentar la alegación relativa a que la firma plasmada en las cédulas no corresponde con la de las denunciantes, es la prueba pericial en grafoscopía, grafología o caligrafía, pues únicamente una persona con conocimientos especiales, es decir un perito en la

materia, puede corroborar que la firma de una persona no corresponde con la plasmada en el documento cuestionado.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio orientador emitido por el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29218, que sostuvo lo siguiente:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, ***debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.***

[Énfasis añadido]

En los casos concretos, Mariana Guadalupe Nayheli González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, desconocieron las firmas plasmadas en las cédulas aportadas por el PVEM.

Por lo anterior, la autoridad instructora consideró necesario el desahogo de una **pericial en grafoscopia**, a efecto de tener mayores elementos encaminados a determinar si medió la voluntad de las denunciante para suscribir los citados documentos, por lo cual, se solicitó el auxilio del Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a efecto de que designara un perito especializado, para la elaboración del peritaje solicitado.

Mediante oficio FOLIO:19799, Enrique Galicia Hernández, persona perita en Materia de Grafoscopia y Documentoscopia, emitió dictamen pericial, en el siguiente sentido:

²¹⁸ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- NO CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN A LA C. ADEMAIDA GARCILAZO AMBRIS LA FIRMA QUE A SU NOMBRE SE ENCUENTRA ELABORADA EN LA CÉDULA DE AFILIACIÓN CUESTIONADA LO ANTERIOR POR LAS RAZONES DE INDOLE TÉCNICO VERTIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO AMPLIAMENTE DESCRITO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.

SEGUNDA: NO CORRESPONDE POR SU EJECUCIÓN A LA C. MARIANA GUADALUPE NAYHELY GONZÁLEZ CASTILLO LA FIRMA DE LA CÉDULA DE AFILIACIÓN CUESTIONADA QUE A SU NOMBRE SE ENCUENTRA ELABORADA LO ANTERIOR POR LAS RAZONES DE INDOLE TÉCNICO VERTIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO AMPLIAMENTE DESCRITO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE.

Ahora bien, como se señaló previamente, las firmas en las cédulas de afiliación son un elemento indispensable para acreditar la voluntad de los ciudadanos para expresar su consentimiento para ser afiliados, pues con la firma se ve reflejada la conformidad con el documento en que se estampa.

Situación que tal como quedó precisado en líneas arriba, en el caso no ocurrió, pues Ademaida Garcilazo Ambris y Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo manifestaron mediante escritos de veintinueve y treinta de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, que las firmas plasmadas en las cédulas de afiliación aportadas por el *PVEM* no correspondían con las suyas.

Lo cual quedó demostrado al concatenarse los dichos de las ciudadanas con el resultado de la prueba pericial realizada, en la que se determinó, en el apartado “CONCLUSIONES”, que **las firmas que obran en las cédulas de afiliación, por su ejecución no corresponde a las quejas.**

De lo anterior, se advierte que se produce convicción sobre lo manifestado por las ciudadanas y se desvirtúa la veracidad de los documentos aportados por el denunciado, para acreditar que las ciudadanas se afiliaron voluntariamente al *PVEM*.

Por tanto, este órgano colegiado considera que **el *PVEM* infringió la normativa electoral respecto al derecho a la libre afiliación de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris.**

No pasa inadvertido que el *PVEM* refiere que la afiliación fue voluntaria, pues le fueron entregados los insumos necesarios por parte de las ciudadanas para realizar la respectiva afiliación, pues la información necesaria para afiliarlas, únicamente pudo ser proporcionada por las propias ciudadanas.

Aunado a lo anterior, señala que no se puede negar la afiliación a persona alguna, porque su firma este mal plasmada, o si la misma es diferente, ya que se deben cuidar los derechos del ciudadano.

De igual forma, manifiesta que el dictamen pericial en grafoscopía que obra en el expediente no otorga certeza a la materia de la litis, toda vez que las respuestas a los cuestionamientos de los incisos a) y c), no tienen certeza y no dan una respuesta clara sobre lo cuestionado, en razón de que el dictamen únicamente señala que la modificación de la firma depende del patrón de variabilidad de cada persona, sin precisar cuáles son esos patrones, circunstancias que podrían ser determinantes para concluir si las firmas plasmadas en las cédulas de afiliación corresponden o no a las quejas, además, respecto a la pregunta b), señala que las firmas no fueron comparadas con documentos que hayan sido firmados en el año dos mil diecinueve (año de afiliación), lo cual constituye otro elemento para afirmar la falta de certeza en el referido dictamen.

Ahora bien, no obstante, lo manifestado por el denunciado, como se precisó previamente, la carga de la prueba corresponde al *PVEM* que afirma que la afiliación fue voluntaria.

En ese sentido, es importante precisar que de las pruebas de autos, se advierte que el denunciado no demostró con pruebas idóneas, que las ciudadanas hubiesen dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hubiesen entregado sus datos personales para tal fin, por lo que su dicho no resulta suficiente para acreditar la voluntad de las quejas de pertenecer a sus filas.

Por otra parte, respecto a los cuestionamientos realizados al dictamen pericial, cabe puntualizar lo siguiente:

- En cuanto a la supuesta falta de certeza que alude el denunciado, respecto a las preguntas señaladas con los incisos a) y c) que a la letra señalan lo siguiente:

...
a) *¿Si al paso del tiempo y la práctica es posible que una persona haya modificado en pequeños detalles la forma de su firma y letra?*

Respuesta: *Dependerá de cada persona y la temporalidad.*

c) ¿Es posible que alguien pueda cambiar su firma con la expedición de nuevas credenciales?

Respuesta: *Dependerá de cada persona y la situación*

Se considera que no existe la falta de certeza señalada por el denunciado, pues las respuestas relativas a los incisos a) y c), dan contestación a preguntas genéricas.

- Respecto a que las firmas no fueron comparadas con documentos que hayan sido firmados en el año dos mil diecinueve, pregunta señalada con el inciso b), que señala lo siguiente:

...

b) ¿ La pericial fue comparada con las firmas y letra del año en que suscribió la cédula de afiliación?

Respuesta: *Los elementos dubitados fueron comparados con elementos indubitables que cumplen los requisitos técnicos para ser idóneos en el presente estudio, dentro de estos la temporalidad....*

En este tenor, el perito de la Fiscalía General de la República al responder al inciso b), da contestación a una pregunta planteada en el caso concreto, en la que señala que para el caso que nos ocupa, las firmas comparadas cumplen con los requisitos para llevar a cabo el estudio de las mismas, entre estos la temporalidad.

Por lo anterior y ante la negativa de las denunciantes de haberse afiliado voluntariamente al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar que las afiliaciones se llevaron a cabo mediante los mecanismos legales establecidos para ello, y por tanto, debió aportar pruebas idóneas, en las que constara fehacientemente la libre voluntad de las hoy promoventes, lo que no hizo, pues como se detalló, **las documentales de las que el partido político denunciado pretende desprender la aceptación de las quejas, fue desvirtuada al concatenar lo manifestado por las denunciantes y la prueba pericial respectiva.**

Por lo que, en el presente caso se considera que **les asiste la razón a Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris**, al haberse acreditado plenamente la responsabilidad del *PVEM* relacionada con la

indebida afiliación de las quejas materia de pronunciamiento en este procedimiento.

B.3. LA CÉDULA APORTADA NO ACREDITA LA AFILIACIÓN DENUNCIADA

El **PVEM**, reconoció como su militante e informó la fecha afiliación de **Rosa Emma García Ramírez**, situación que fue corroborada por la **DEPPP** quien, además, proporcionó la fecha en que esta persona fue afiliada al partido, de conformidad con lo informado oportunamente por el propio instituto político hoy denunciado.

Asimismo, el **PVEM** exhibió el original del formato de afiliación a nombre de la persona denunciante, a fin de acreditar, según su dicho, que el registro aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos, para tal efecto, en su normativa interna, toda vez que en dicho documento consta firma autógrafa, sin embargo, **existe discordancia en la fecha de afiliación informada, tanto por la DEPPP como por el propio partido político y, la reflejada en la cédula aportada por dicho ente político**, como lo observamos en la tabla siguiente:

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada a requerimiento expreso de la UTCE		Fecha que se aprecia en el original de la cédula de afiliación
	DEPPP	PVEM	
Rosa Emma García Ramírez	11/09/2019	11/09/2019	<u>26/09/2019</u>

En el caso, una vez que esta autoridad examinó el cúmulo probatorio que obra en autos, identificó diversas inconsistencias en cuanto a la cronología de los hechos, pues en los casos que se analizan en el presente apartado, se advierte lo siguiente:

- La fecha de registro que obra en los archivos de **DEPPP**, difiere de la que consta en la cédula de afiliación aportada por el **PVEM**.
- La fecha de afiliación que precisó el **PVEM**, difiere de la que consta en la cédula de afiliación aportada por dicho denunciado.
- La fecha que consta en la cédula de afiliación aportada por el **PVEM**, es diferente y **posterior** a la fecha de registro con que cuenta la **DEPPP** y a la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

que informó dicho partido político a requerimiento expreso de la autoridad sustanciadora.

- Las fechas de inscripción y las fechas contenidas en los formatos de afiliación de las personas de mérito corresponden al año dos mil diecinueve, temporalidad en la que, **si bien estaba vigente el acuerdo INE/CG33/2019** (uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte), lo cierto es que **dicho acuerdo no es aplicable al caso concreto**.

Lo anterior, ya que, **se trata de nuevos registros de afiliación, los cuales, dada la fecha y la etapa establecida en el acuerdo INE/CG33/2019 en que se realizaron, el PVEM ya debía contar con el respectivo formato de afiliación que amparara ese registro.**

Sobre esto último, debe señalarse que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019, **el plazo para llevar al cabo las actividades del procedimiento de revisión, actualización y sistematización** de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, **sería el comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte.**

No obstante, **el procedimiento** de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, **fue dividido por etapas y fechas de inicio y fin**, conforme a lo siguiente:

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
AVISO DE ACTUALIZACIÓN	Publicitar actualización de padrones	PPN	01/02/2019	31/01/2020
	Publicar leyenda "EN REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN"	INE	01/02/2019	31/01/2020
	Informe conclusión de etapa	INE	01/02/2020	28/02/2020
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Baja definitiva de las personas que interpusieron queja por indebida afiliación previo a la aprobación del Acuerdo	PPN	01/02/2019	31/03/2019
	Baja definitiva de registros por indebida afiliación presentada posterior a la aprobación del Acuerdo	PPN	10 días hábiles	
	Identificación de registros con documentación soporte de afiliación	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Publicación de los registros en reserva	PPN	01/02/2019	31/07/2019
	Notificación al INE de registros en reserva	PPN	5 días hábiles de cada mes Mar-Ago	
	Actualizar padrones de los PPN con registros en reserva	INE	5 días hábiles posterior a la notificación	
	Informe conclusión de etapa	INE	01/08/2019	31/08/2019

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

ETAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
			Inicio	Fin
RATIFICACIÓN	Aprobar mecanismos para ratificación y refrendo de militancia, en caso de haberlo	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Informar a la militancia proceso de ratificación y refrendo	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Recabar documentación que acredite la afiliación	PPN	01/02/2019	31/12/2019
	Informar registros que ratificaron o refrendaron su militancia	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Actualizar padrones de los PPN en función de los registros refrendados	INE	01/03/2019	31/12/2019
	Cancelar registros en reserva de los que no se obtenga documentación soporte	PPN	01/03/2019	31/12/2019
	Informe conclusión de etapa	INE	02/01/2020	31/01/2020
CONSOLIDACIÓN	Ajustes finales al padrón de afiliadas y afiliados	PPN	02/01/2020	31/01/2020
	Informar respecto de la cancelación de registros en reserva de los que no se obtuvo documentación soporte de afiliación	PPN	09/01/2020	31/01/2020
	Apercibir respecto de los registros en reserva	INE	31/01/2020	31/01/2020
	Informe final	INE	01/02/2020	29/02/2020

De lo anterior y conforme a lo establecido en el acuerdo **INE/CG33/2019**, se obtiene lo siguiente:

- 1. REVISIÓN.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve los partidos políticos llevaron a cabo la revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados a estos.²¹⁹
- 2. RESERVA.** Del uno de febrero al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, los partidos políticos debían reservar los registros de los padrones de militantes de aquellas personas **respecto de las cuales no tengan la cédula de afiliación** correspondiente o documento que lo acredite indubitadamente, aun cuando no se hubieren presentado las respectivas quejas por indebida afiliación.²²⁰

Esto es, el **treinta y uno de julio de dos mil diecinueve** venció el plazo para que los partidos políticos reservaran los registros de afiliación con los que **a esa fecha contaban.**

²¹⁹ Considerando 12, **numeral 2**, con relación al **numeral 2.2**, del acuerdo INE/CG33/2019.

²²⁰ Considerando 12, **numeral 2**, con relación al **numeral 2.2**, inciso **b)**, del acuerdo INE/CG33/2019.

3. **RATIFICACIÓN.** A más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos realizaron el procedimiento de ratificación o refrendo de la militancia, **respecto de todos aquellos registros clasificados como reservados** dado que no cuentan con cédula de afiliación.²²¹

Esto es, si bien a más tardar al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, los partidos políticos podían recabar una cédula de afiliación que acredite la debida afiliación de sus militantes, lo cierto es que **dicho plazo solo resulta aplicable para aquellos registros reservados al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.**

Conforme a lo anterior, se obtiene la premisa siguiente:

4. **REGISTROS POSTERIORES AL 31 DE JULIO DE 2019.** Al tratarse de registros que al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, no se encontraban en los padrones de los partidos políticos, estos no fueron reservados, por tanto, se trata de **registros nuevos**²²² que, para llevarlos a cabo, debieron contar a esa fecha con la respectiva cédula de afiliación.²²³

Lo anterior, puede ilustrarse en la siguiente línea de tiempo:

²²¹ Considerando 12, numeral 2, con relación al numeral 3, del acuerdo INE/CG33/2019.

²²² Considerando 13 del acuerdo INE/CG33/2019: **13. Las nuevas afiliaciones de las y los militantes de los PPN**, así como los refrendos o ratificaciones **deberán incluir elementos mínimos, a fin de que puedan demostrar fehacientemente la debida afiliación de la ciudadanía**, a saber: nombre completo, clave de elector, **fecha de afiliación**, domicilio completo y la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN, además deberán contener los requisitos que establezca la normatividad interna de cada PPN. Adicionalmente, el INE desarrollará una aplicación móvil que permita a los partidos políticos obtener nuevas afiliaciones, ratificaciones o refrendos, de su militancia. Lo anterior, automatizará el procedimiento de afiliación, ratificación o refrendo, además de que el INE resguardará un archivo digital de ello en un expediente electrónico; sin que esto exima al PPN de la obligación de conservar el documento (físico o digital) que acredite la debida afiliación, refrendo o ratificación en virtud de que los PPN son los sujetos obligados del cuidado y manejo de los datos que obran en sus padrones de afiliadas y afiliados. (...)

²²³ Considerando 12, numeral 3, con relación al numeral 3, del acuerdo INE/CG33/2019: **De obtener la manifestación de voluntad de la persona ciudadana** en el sentido de que sí estaba afiliada al partido político y ésta se manifieste por escrito o a través de la aplicación móvil, entonces **deberá proceder la ratificación de la militancia con la fecha de afiliación asentada en el padrón —verificado por el Instituto en 2017** y actualizado de forma permanente por los partidos políticos— publicado en la página del INE con corte a la fecha de aprobación de este Acuerdo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

LÍNEA DE TIEMPO PARA LA OBTENCIÓN DE FORMATO DE AFILIACIÓN



Conforme a lo anterior, en el caso concreto, se obtiene lo siguiente:

	REVISIÓN DE PADRONES	RESERVA DE REGISTROS	FECHA DE AFILIACIÓN DE PPP-PVEM	FECHA QUE SE APRECIA EN EL ORIGINAL DE LA CÉDULA	RATIFICACIÓN- OBTENCIÓN DE DOCUMENTAL DE REGISTROS RESERVADOS
Persona	Del 1 de febrero al 31 de julio de 2019	Del 1 de febrero al 31 de julio de 2019	Afiliación con posterioridad al 31 de julio de 2019, temporalidad en la que el PVEM tenía conocimiento del acuerdo INE/CG33/2019, por lo que los nuevos registros debían contar con formato de afiliación	Fecha distinta y posterior a la que se llevó a cabo el registro de afiliación	A más tardar al 31 de diciembre de 2019.
Rosa Emma García Ramírez	No aplica (Registro realizados con posterioridad al 31 de julio de 2019, esto es, es registro nuevo que, por tanto, no fue revisado, ni tampoco reservado).		11/09/2019	<u>26/09/2019</u>	No aplica (Registro que no fue reservados, porque fue realizado con posterioridad al 31 de julio de 2019).

Así, la línea de tiempo anterior permite evidenciar, respecto a **Rosa Emma García Ramírez**, lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

- El registro fue realizado con posterioridad al treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, razón por la que, **no se encuentran dentro de la temporalidad en que pudieran ser “reservados”**.
- **El registro no fue “reservados”** y, por tanto, el **PVEM** no podía recabar la cédula de afiliación a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
- **Se trata de un nuevo registro de afiliación, del cual, dada la fecha y la etapa en que se realizó, el **PVEM** ya debía contar con el respectivo formato de afiliación que amparara ese registro, esto es, previo a realizar el registro ante la **DEPPP**.**

En consecuencia, se concluye que el formato de afiliación exhibido por el **PVEM**, para acreditar la legalidad de la afiliación de **Rosa Emma García Ramírez no es el documento fuente del cual emana el registro de la persona quejosa como militante de ese instituto político**.

Por tanto, a consideración de este órgano resolutor, el documento exhibido por el partido político denunciado, según corresponda, no es válido para acreditar la legal de **Rosa Emma García Ramírez**, toda vez que existe presunción fundada de que fue creado y/o alterado para atender lo requerido por la autoridad instructora, sin tener coherencia respecto de la fecha de los hechos acreditados, como lo es la de afiliación registrada por el propio partido político denunciado en el Sistema para la Verificación del Padrón de Afiliados del **INE**.

Sobre esto último, criterio similar sostuvo este *Consejo General*, entre otras, en la resolución INE/CG469/2020,²²⁴ INE/CG182/2021²²⁵ e INE/CG82/2022,²²⁶ de siete de octubre de dos mil veinte y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno y cuatro de febrero de dos mil veintidós, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con la clave UT/SCG/Q/FJLG/JD08/VER/148/2018, UT/SCG/Q/LRA/JD04/COAH/23/2020 y UT/SCG/Q/CPE/JD12/MEX/162/2020, respectivamente.

²²⁴ Consultable en la página de internet del **INE**, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114990/CGex202010-07-rp-1-154.pdf>

²²⁵ Consultable en la página de internet del **INE**, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118865/CGex20210319-rp-1-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²²⁶ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126905/CGex202202-04-rp-5-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

En conclusión, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que el **PVEM** infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **Rosa Emma García Ramírez**, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** para ser registrada como militante de ese partido.

CONCLUSIONES GENERALES EN RELACIÓN A TODOS LOS CASOS EN QUE S ACTUALIZA LA INFRACCIÓN

Se destaca que no se actualiza alguna excepción o defensa que actualice alguna modificación en el presente proyecto de conformidad con lo siguiente:

Excepción o defensa	Motivo por el que no se actualiza
No existe afiliación indebida de las y los quejosos al <i>PVEM</i> , en razón de que es un derecho que se ejerce libremente cumpliendo el trámite correspondiente, en el caso, los quejosos de forma voluntaria presentaron fotocopia de la credencial de elector y llenaron la respectiva cedula de afiliación, por lo que la misma fue conforme a la normatividad electoral y a los estatutos de ese instituto político.	De conformidad con lo establecido en los subapartados previos no se acreditó la voluntad de las y los denunciantes de ser su militante: 1. No se aportó documento alguno para acreditar la voluntad de afiliación de Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz 2. La firma plasmada en las cédulas de afiliación de Mariana Guadalupe Nayheli González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, no corresponde a estas. 3. La cédula correspondiente a Rosa Emma García Ramírez no es idónea por haber sido generada con posterioridad al registro ante la <i>DEPPP</i> .
Actualmente los quejosos no se encuentran registrados en el Padrón de afiliados del <i>PVEM</i> , lo anterior en atención a la voluntad manifestada por los mismos.	El hecho de haber dado de baja a las y los denunciantes no es un excluyente de responsabilidad toda vez que no acredita la voluntad inicial de las y el denunciante de ser sus militantes, además que dichas bajas fue por instrucción directa de la autoridad instructora.
Invoca el principio de presunción de inocencia, toda vez que no existe prueba que demuestre plenamente la responsabilidad del <i>PVEM</i> , por lo cual, no es factible sustentar la infracción y la sanción que se le pretende aplicar	Respecto de la solicitud del partido político denunciado, en el sentido de que esta autoridad resuelva el presente procedimiento observando el principio de presunción de inocencia, debe decirse que, el citado principio constitucional

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Excepción o defensa	Motivo por el que no se actualiza
	que menciona, como ya ha sido analizado apartados arriba, no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que, en su defensa, debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora, lo que en el caso no ocurrió, pues como se ha insistido, el <i>PVEM</i> no presentó constancias idóneas de las que se desprenda que las personas denunciantes otorgaron su consentimiento para ser afiliadas y, por el otro lado, obran constancias en el expediente que demuestran las afiliaciones a un partido político de las personas denunciantes, quienes hoy desconocen, las cuales no se encuentran soportadas por las constancias que demuestren el acto volitivo para querer ser inscritas como sus militantes
La afiliación voluntaria de algunos quejosos fue en 2016, sin que en el periodo comprendido del 2016 al 2019 hayan presentado alguna queja por indebida afiliación, fue hasta 2020 cuando tuvieron la intención de aspirar al cargo de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as para el proceso electoral 2020-2021, como lo es el caso de Siomara Paola Rentería Lugo, Jorge Eduardo Hemkes Moreno y Juan Pedro Ruelas Franco.	Con independencia de que las denuncias se hubieran interpuesto con motivo de algún procedimiento de contratación, el mero hecho de que las personas denunciantes presentaran escritos de queja en los que se advierte el señalamiento expreso de que fueron afiliados sin haberlo autorizado, es suficiente para dar trámite a las mismas.
No existe uso indebido de los datos personales de los quejosos, en razón de que ellos mismos los proporcionaron al afiliarse al <i>PVEM</i> , incluso en los mismos formatos de afiliación, se hace referencia al aviso de privacidad, los datos que les son requeridos son solo los necesarios para su debido registro, los cuales, son utilizados exclusivamente para los fines determinados por la legislación electoral y estatutaria correspondiente.	Contario a lo señalado por el <i>PVEM</i> , al no acreditarse la voluntad de las personas quejasas ser sus militantes, se tiene que indebidamente se utilizaron sus datos personales para afiliarles.

Con base en todo lo expuesto, toda vez que **Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Emma García, Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, manifiestan no haber otorgado su consentimiento para ser agremiadas al partido; que está comprobada su afiliación, y que *el PVEM*, no cumplió su carga para demostrar que las afiliaciones sí se solicitaron voluntariamente, **esta autoridad electoral considera que existe una vulneración al derecho de afiliación de estas, y que, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, se utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado para la imposición de la sanción que, en cada caso, amerite.

Por ello, se considera necesario señalar que, se cuenta con pronunciamientos de la *Sala Superior*, por lo que se refiere al vínculo entre la afiliación no consentida y la utilización indebida de información personal; al efecto, se cita la parte conducente del recurso de apelación SUP-RAP-141/2018:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Por tanto, debe establecerse que, la utilización indebida de información personal de las partes denunciante va de la mano con la afiliación no autorizada.

En síntesis, se considera necesario asentar que el supuesto de infracción que aquí se analiza —esto es, la indebida afiliación—, ha sido ya suficientemente explorado a nivel jurisdiccional, al grado que existen ya criterios como lo es la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, citada en líneas previas, criterios en los que se ha establecido: *la obligación de los partidos políticos de contar con elementos a partir de los cuales se pueda acreditar que se contó con la voluntad de los ciudadanos para darles de alta como afiliados*; del mismo modo, se ha validado el derecho de las personas a reprochar la afiliación que no consintieron y,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

como consecuencia de lo anterior, la obligación de esta autoridad de dar trámite a tales denuncias; del mismo modo, se tiene claridad en cuanto a los requisitos que las quejas deben contener, y se han confirmado las sanciones determinadas por este Instituto para tales conductas.

Por todo lo anterior, es válido concluir que el *PVEM* no demostró que las afiliaciones de los **denunciantes**, se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que hayan dado su consentimiento libre para ser afiliadas y, por el contrario, de las constancias del expediente se desprende que, las afiliaciones denunciadas no fueron consentidas por las denunciantes.

A similares conclusiones, arribó este *Consejo General*, el emitir, entre otras, las resoluciones INE/CG480/2021 de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, que resolvió el expediente UT/SCG/Q/DRZ/CG/88/2020, la cual fue confirmada por la *Sala Superior* a través del recurso de apelación SUP-RAP-144/2021; así como la diversa INE/CG1537/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MLMT/JD06/CDM/193/2020 y más recientemente las resoluciones INE/CG70/2022, INE/CG74/2022, y INE/CG75/2022 aprobadas el cuatro de febrero del año en curso, mismas que fueron confirmadas en las sentencias dictadas a los recursos de apelación SUP-RAP-37/2022, SUP-RAP-35/2022 y SUP-RAP-36/2022.

Por último, no pasa inadvertido que Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, negaron haber firmado las cédulas de afiliación con las cuales las pretendieron acreditarlas como militantes del *PVEM*, advirtiéndose una presunta falsificación de su firma; manifestación que fue corroborada a través del dictamen en materia de grafoscopia rendido por perito oficial de la Fiscalía General de la República.

En tal sentido, se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en el ámbito de su competencia conozca de los actos y/o hechos de referencia, a efecto de que sea dicha instancia quien determine lo conducente.

Asimismo, se dejan a salvo los derechos de las ciudadanas, a fin de que, en caso de estimarlo pertinente, hagan valer por la vía correspondiente y ante la autoridad competente dicha situación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Criterio similar sustentó este Consejo General en la resolución INE/CG80/2022, dictada el cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CMGP/JD04/CHIH/238/2020.

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PVEM*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones Jurídicas Infringidas
<i>PVEM</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la vulneración por parte del <i>PVEM</i> al derecho de libre afiliación y el uso no autorizado de los datos personales de siete personas quejasas, en la modalidad positiva (afiliación indebida).	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un

derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* **incluyó indebidamente** en su padrón de afiliados a **Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Emma García, Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, sin demostrar que para incorporarlas medió la voluntad de estas de inscribirse a dicho padrón, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para las indebidas afiliaciones acreditadas, se usaron los datos personales de las personas denunciantes sin que estas hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los actores al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al partido político involucrado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el caso, se considera que se está en presencia de una falta singular.

Ello, toda vez que, aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del propio instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de una persona, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político denunciado, quien incluyó en su padrón de militantes a las hoy partes actoras, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta aquí analizada debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

Modo. En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PVEM*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, de la *Constitución*; así como 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Rosa Emma García, Ramírez, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de estas personas de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Tiempo y lugar. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en las fechas y lugares que se precisan en la siguiente tabla:

No.	Ciudadano	Fecha de Afiliación conforme a la <i>DEPPP</i>	Entidad
1	Natalia Margarita Campeán Rodríguez	30/12/2019	San Luis Potosí
2	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	13/06/2019	Estado de México
3	Ademaida Garcilazo Ambris	12/11/2019	San Luis Potosí
4	Silvia Carolina Valdez Marín	06/04/2019	Jalisco
5	Juan Pedro Ruelas Franco	14/10/2016	Jalisco
6	Mariel Torres Ortiz	12/02/2019	Jalisco
7	Rosa Emma García Rmírez	11/09/2019	Guanajuato

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PVEM* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus de **entidad de interés público**, de conformidad con el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El *PVEM*, como cualquier otro partido está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La transgresión a la libertad de afiliación, es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales del ciudadano que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**
- El *PVEM* tenía conocimiento de los alcances y obligaciones que se establecieron a los partidos políticos en el acuerdo INE/CG33/2019, y sobre la necesidad de depurar sus padrones de militantes a fin de que estos fuesen confiables y se encontraran amparados por los documentos que demostraran la libre voluntad de sus agremiados de pertenecer a sus filas. Asimismo, conocía a cabalidad las etapas en que se dividió el acuerdo y las cargas y obligaciones que debía observar en todo su desarrollo.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta relativa a la afiliación indebida se considera dolosa, porque:

- 1) Las personas denunciantes aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PVEM*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de las y el quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.

- 4) El *PVEM* no demostró ni probó que las afiliaciones de las seis personas quejasas, fueran consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

Incluso, en los casos de **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris**, se demostró que el denunciado actuó dolosamente al presentar dentro del procedimiento documentación falsa a esta autoridad electoral, consistente en las cédulas de afiliación cuyas firmas no corresponden a las hoy quejasas, en términos de lo determinado por el perito en grafoscopía adscrito a la Fiscalía General de la República, a fin de engañar a esta autoridad, con el propósito de hacer creer que las afiliaciones que en un momento fueron controvertidas por las denunciantes habían sido realizadas con su consentimiento y en pleno apego a Derecho; situación que fue desmentida, al momento de practicar diligencias de investigación adicionales que así lo corroboraron.

Esta situación, en el presente caso, cobra especial relevancia pues pone en evidencia la intención del referido instituto político de conducirse con falsedad ante esta autoridad nacional electoral, toda vez que en lugar de admitir su responsabilidad respecto a los hechos denunciados, optó por allegar al procedimiento documentos apócrifos y, con ello, evitar ser sancionado por la vulneración al derecho de libre afiliación de las denunciantes, lo que denota un actuar indebido por parte del *PVEM*, que de forma evidente resulta contrario a los fines y objetivos que deben observar las entidades de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41 de la Constitución y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP* deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

- 5) El registro de afiliación de una de las personas denunciantes, se efectuó antes del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fecha en la que se aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, como se muestra en el siguiente cuadro:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Juan Pedro Ruelas Franco	14/10/2016

Mientras que el de las restantes seis ocurrió con posterioridad a la aprobación del citado acuerdo:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	30/12/2019
2	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	13/06/2019
3	Ademaida Garcilazo Ambris	12/11/2019
4	Silvia Carolina Valdez Marín	06/04/2019
5	Mariel Torres Ortiz	12/02/2019
6	Rosa Emma García Ramírez	11/09/2019

- 6) La cancelación de los registros de afiliación, se efectuaron fuera de los plazos establecidos en el acuerdo **INE/CG33/2019**, como se muestra en el siguiente cuadro.

No.	Ciudadano	Fecha de cancelación
1	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	08/02/2021
2	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	30/11/2020
3	Ademaida Garcilazo Ambris	30/11/2020
4	Silvia Carolina Valdez Marín	30/11/2020
5	Juan Pedro Ruelas Franco	30/11/2020
6	Mariel Torres Ortiz	04/11/2020
7	Rosa Emma García Ramírez	30/11/2020

Sobre estos dos últimos puntos, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, **debían, indefectiblemente, contar con los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación**, ya que la facultad de reservar el registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; sin embargo, como ya se mencionó, en el caso que nos ocupa, el partido no reservó la afiliación de los quejosos, ni mucho menos acompañó la documentación comprobatoria.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la respectiva individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las personas denunciantes de ser sus militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de agremiados, en los términos impuestos en este acuerdo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM*, se cometió **al afiliar indebidamente a siete personas**, sin demostrar el acto volitivo de estos tanto de inscribirse en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de las personas quejasas de militar en ese partido político y de demostrar que sí realizó la baja de su padrón o de demostrar la voluntad de estos de querer seguir perteneciendo a dicho instituto político

Además, como se indicó, la afiliación de seis personas ocurrió durante la vigencia del acuerdo INCE/C33/2019 y si bien, hubo una que no, lo cierto es que, a partir de la emisión del mismo, el denunciado **ya tenía la obligación de contar con la documentación que justificara la incorporación de dichas personas a su padrón de afiliados**; sin embargo, en los casos que nos ocupa, no acompañó dicha documentación idónea comprobatoria a ninguna de sus intervenciones procesales, circunstancia relevante para el caso que nos ocupa, que será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción aplicable al caso concreto.

Así pues, el denunciado debió contar y/o verificar que contaba con las respectivas cédulas de afiliación para realizar el registro, a fin de evitar una contravención a la normativa electoral, lo cual no aconteció.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

En el caso, sí se actualiza la **reincidencia**, en seis de los siete casos, conforme a las razones que se exponen a continuación.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**²²⁷

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en los archivos de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra la resolución INE/CG448/2018, aprobada por el *Consejo General*, el **once de mayo de dos mil dieciocho**, la cual fue emitida dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, a efecto de sancionar al *PVEM*, por haber inscrito a su padrón de afiliados a una ciudadana sin su consentimiento. Resolución que fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el SUP-RAP-137/2018, el seis de junio de dos mil dieciocho.

Con base en ello, y tomando en consideración que las afiliaciones indebidas de **Natalia Margarita Compeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Mariel Torres Ortiz y Rosa Emma García Ramírez**, por las que se demostró las infracciones en el presente procedimiento, fueron realizadas el **treinta de**

²²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

diciembre, trece de junio, doce de noviembre, seis de abril y doce de febrero, todas estas de dos mil diecinueve, respectivamente, se estima que en el caso **sí** existe reincidencia, respecto de estos casos.

Similar criterio adoptó este *Consejo General*, al emitir, entre otras, la resolución INE/CG168/2021 el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el procedimiento administrativo UT/SCG/Q/JLAR/JL/OAX/83/2020.

Mientras que la afiliación correspondiente Juan Pedro Ruelas Franco no se actualiza la reincidencia por haber ocurrido antes de que la resolución mediante la cual se sancionó al *PVEM* quedara firme.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditadas las infracciones, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísimas, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **siete** personas denunciantes, al partido político, pues se comprobó que el *PVEM* las afilió sin demostrar contar con la documentación que acreditara que medió la voluntad de estas de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

- Además se demostró, que el denunciado actuó con dolo durante la sustanciación del procedimiento seguido en la presente causa, al adjuntar, en los casos relativos a las ciudadanas **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris**, pruebas falsas en términos de los resultados arrojados por el peritaje practicado por la Fiscalía General de la República, a las cédulas de afiliación exhibidas por dicho instituto político, lo que se traduce en una actitud por demás reprochable y ajena a los fines que deben ser observados por entidades de interés público como lo son los partidos políticos.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la violación a la libertad de afiliación las personas denunciadas, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte de *PVEM*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una infracción o falta administrativa, toda vez que se configuró una conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- Sí existe reincidencia por parte de *PVEM*, por lo que hace a los supuestos de **Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Mariel Torres Ortiz y Rosa Emma García Ramírez**.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político denunciado como de **gravedad ordinaria**, en los casos de **Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Juan Pedro Ruelas Franco, Silvia Carolina Valdez Marín, Mariel Torres Ortiz y Rosa Emma García Ramírez**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejosas, lo que constituye una transgresión al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*

Mientras que en los casos de **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaída Garcilazo Ambris**, se actualizó una **gravedad especial**, ya que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PVEM* no solamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos lo que constituye, por sí mismo, una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la *Constitución*, sino que además, actuó dolosamente durante la sustanciación del procedimiento, pretendiendo engañar a esta autoridad electoral, pues para intentar librarse de la responsabilidad que se le atribuía, pretendió acreditar las afiliaciones de estas, con pruebas que se demostraron falsas, en términos de los resultados arrojados por el peritaje practicado por personal de la Fiscalía General de la República.

Actuar que, sin lugar a dudas, resulta contrario a los principios constitucionales que debe respetar el mismo y que debe ser considerado para la imposición de la sanción respectiva, por parte de esta autoridad electoral.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, como el que ha quedado demostrado a cargo del *PVEM*, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana o ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**.

Es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PVEM*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

*Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.*

[Énfasis añadido]

Destacándose que en términos del acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas hoy quejas de su padrón de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la observancia de las obligaciones a cargo de los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acredita la infracción** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del *PVEM*, aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo INE/CG33/2019, de veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PVEM* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.³⁰ Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediatez debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que la actitud adoptada por el *PVEM*, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGPE*, toda vez que dicha actitud redundaría en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de la persona denunciante del padrón de militantes del partido denunciado aconteció en enero dos mil veintiuno, **temporalidad en la que no le es aplicable** los beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, **en ese momento ya había concluido la etapa de Consolidación de padrones**,²²⁸ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

Ahora bien, en el caso concreto es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares, en cada uno de los casos, que llevaron a esta autoridad a determinar fundados los procedimientos ordinarios sancionadores incoados en contra del *PVEM*, tal como se ha precisado previamente.

Situaciones que deberán de ser tomadas en cuenta de forma individual al momento de imponer las sanciones correspondientes.

En primer lugar, respecto a **Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Silvia Carolina Valdez Marín, Juan Pedro Ruelas Franco y Mariel Torres Ortiz**, no aportó prueba alguna para acreditar la afiliación denunciando, mientras que en el

²²⁸ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

caso de **Rosa Emma García Ramírez**, la documentación aportada no fue idónea, por lo que en todos estos casos, se determinó declarar fundado el procedimiento, siendo que no reservó el registro de estas y, por otra, la baja de las y el denunciante del padrón de militantes acontecieron el veintiuno de octubre y treinta de noviembre de dos mil veinte, temporalidad en la que no le son aplicables los beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, en ese momento ya había concluido la etapa de Consolidación de padrones,²²⁹ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

Ahora bien, respecto de **Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris**, se advierte la existencia de circunstancias extraordinarias, pues, como se precisó en el apartado respectivo las quejas manifestaron que las firmas de las cédulas de afiliación no correspondían con la suya, situación que fue corroborada mediante peritaje elaborado por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República.

Dicha situación cobra especial relevancia y no puede pasar desapercibida para este *Consejo General*, pues el *PVEM* no solo vulneró el derecho de libertad de afiliación y la utilización de los datos personales de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, sino que además actuó dolosamente y pretendió engañar a esta autoridad electoral, presentando documentación falsa para acreditar que la afiliación de las quejas se realizó con su consentimiento y así evitar ser sancionado por la indebida afiliación de las mismas.

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte del *PVEM* que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del *PVEM*, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto

²²⁹ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PVEM* **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de las **siete personas quejosas**, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue que la cancelación de los registros se llevó a cabo con

posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte y, en los casos de **Natalia Margarita Campeán Rodríguez, Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo, Ademaida Garcilazo Ambris, Silvia Carolina Valdez Marín, Mariel Torres Ortiz y Rosa Emma García Ramírez**, el registro ocurrió, en una época en la que los nuevos registros de afiliación que los partidos político realizarán, ya debían contar con la respectiva cédula de afiliación en el modo tradicional o, en su caso, con el cumplimiento de ellos requisitos establecidos para la afiliación vía aplicación móvil, toda vez que había transcurrido el periodo establecido por el Acuerdo INE/CG33/2019 (treinta y uno de enero de dos mil veinte); que se concluyó la existencia del dolo, y que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en los casos concretos, se considera imponer una las siguientes sanciones:

- **Multa equivalente a 963 (novecientos sesenta y tres)** unidades de medida y actualización (UMAs), al momento de la comisión de la conducta, **por las afiliaciones indebidas**, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se consideran las condiciones previamente descritas.

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, las identificadas con las claves **INE/CG483/2021**²³⁰ e **INE/CG1529/2021**,²³¹ confirmadas a través de las sentencias dictadas en los expedientes **SUP-RAP-143/2021**²³² y **SUP-RAP-427/2021**²³³, respectivamente.

- **Multa equivalente a 1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la

²³⁰ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120410/CGor202105-26-rp-10-4.pdf>

²³¹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125185/CGex202109-30-rp-1-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²³² Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0143-2021.pdf

²³³ Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/RAP/427/SUP_2021_RAP_427-1098342.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

conducta, según corresponda, en aquellos casos en los que se acreditó la **reincidencia**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con la clave **INE/CG168/2021**.

Ahora bien, tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- El hecho de que el partido denunciado las siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte;
- Que la afiliación indebida fue realizada en dos mil diecinueve;
- Que la falta fue calificada como grave especial;
- Que se concluyó la existencia del dolo, y
- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante.

Por ello, en principio, esta autoridad considera adecuado imponer una multa de **1,284 Unidades de Medida y Actualización** (mil doscientas ochenta y cuatro UMA's) vigentes al momento de la comisión de la conducta, es decir, en el año dos mil diecinueve (**\$84.49** –ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.),⁵⁷ **equivalente a \$108,485.16** (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100), por cada una de las referidas ciudadanas.

No obstante, para este caso, cuya gravedad fue calificada como especial, se debe destacar la existencia de circunstancias extraordinarias, pues, como se precisó en el apartado respectivo, las personas denunciantes manifestaron que la firma de las cédulas de afiliación no correspondía con la suya, situación que fue corroborada mediante peritaje elaborado por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República.

Dicha situación cobra especial relevancia y no puede pasar desapercibida por este Consejo General, pues el *PVEM* no sólo vulneró el derecho de libertad de afiliación y la utilización de los datos personales de Mariana Guadalupe Nayhely González

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, sino que además presentó documentación falsa para acreditar que la afiliación de estas se realizó con su consentimiento y así evitar ser sancionado por la indebida afiliación de estas.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la indebida afiliación de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue la presentación de una cédula de afiliación falsa para acreditar su afiliación y el uso indebido de sus datos personales para tal fin, pues como quedó precisado previamente, los mismos constituyen un insumo necesario para que un instituto político pueda afiliar a una persona, **esta autoridad considera adecuado imponer, adicional a la cantidad antes precisada, una multa de 2,000 (dos mil) Unidades de Medida y Actualización**, al momento de la comisión de la conducta.

Por tanto, para este caso, la multa total a imponer por cada una de las denunciadas que nos ocupan, será de **3,284 (tres mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización**, vigentes al momento de la comisión de los hechos, es decir, en el año dos mil diecinueve (**\$84.49** –ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), **equivalente a \$277,465.16** (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 16/100).

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- *De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.*

Para el caso que nos ocupa, al haberse cometido la infracción con posterioridad a la reforma en comento, el monto se calculará multiplicando el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por la suma precisada.

Precisado lo anterior, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,²³⁴ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios*

²³⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?dttesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Así, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) **Unidades de Medida y Actualización**²³⁵ o, **963** (novecientos sesenta y tres) **días de salario mínimo general para el Distrito Federal**,²³⁶ según corresponda, al momento de la comisión de la conducta, **por cada una de las personas que se considera fueron afiliadas indebidamente, así como por el uso indebido de sus datos personales, incrementando el monto de la sanción en el caso en el que se acreditó la reincidencia, para imponer 1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la conducta, según corresponda, siendo que, en los casos en los que además se calificó la falta como especial al haberse aportado documentación falsa para pretender acreditar la afiliación a sanción se incrementa a 3,284 (tres mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, a 3,284 (tres mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la conducta, para quedar en los siguientes términos:

PVEM					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	Juan Pedro Ruelas Franco	14/10/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
TOTAL					\$70,337.52 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

PVEM					
Casos en los que además existe reincidencia					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	30/12/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16
2	Silvia Carolina Valdez Marín	06/04/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16
3	Mariel Torres Ortiz	12/02/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16
4	Rosa Emma García Ramírez	11/09/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16

²³⁵ En lo sucesivo *UMA*.

²³⁶ En lo subsecuente *SMGVDF*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

PVEM Casos en los que además existe reincidencia					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
TOTAL					\$433,940.64 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

PVEM Casos en los que se acredita reincidencia y además se aportó documentación falsa para intentar acreditar la afiliación.					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	13/06/2019	3,284	\$ 84.49	\$277,465.16
2	Ademaida Garcilazo Ambris	12/11/2019	3,284	\$ 84.49	\$277,465.16
TOTAL					\$554,930.32 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**²³⁷

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PVEM** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

²³⁷ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte de *PVEM*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DEPPF/02997/2022, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PVEM* le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de octubre de dos mil veintidós, la cantidad de \$ 19,751,300.62 (Diecinueve millones, setecientos cincuenta y un mil, trescientos pesos 62/100 M.N.), una vez descontado el importe de las sanciones que se le impusieron.

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el siguiente porcentaje:

<i>PVEM</i>				
No.	Ciudadano	Año de afiliación	Monto de la sanción por ciudadano	Porcentaje de la ministración mensual por persona ²³⁸
1	Juan Pedro Ruelas Franco	2016	\$70,337.52	0.36%
2	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	2019	\$108,485.16	0.55%

²³⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

PVEM				
No.	Ciudadano	Año de afiliación	Monto de la sanción por ciudadano	Porcentaje de la ministración mensual por persona²³⁸
3	Silvia Carolina Valdez Marín	2019	\$108,485.16	0.55%
4	Mariel Torres Ortiz	2019	\$108,485.16	0.55%
5	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	2019	\$277,465.16	1.4%
6	Ademaida Garcilazo Ambris	2019	\$277,465.16	1.4%
7	Rosa Emma García Ramírez	2019	\$108,485.16	0.55%

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—²³⁹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIFE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PVEM*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁴⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del

²³⁹ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

²⁴⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de las **catorce personas** que se citan a continuación, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO, punto 6, apartado A**, de esta resolución.

No.	Persona denunciante
1	Kevin García Eichner
2	Nora Hilda Zavala Ortega
3	César Jiménez Sánchez
4	Mariano Moreno Luna
5	Rosario Del Pilar Gómez Pérez
6	Moisés Gómez Méndez
7	Laura Ma. del Carmen Valdivia Méndez
8	Lizbeth Sarai Rodríguez Ruiz
9	María Guadalupe López Olmedo
10	Siomara Paola Rentería Lugo
11	Rosa Abilene Mireles Castañeda
12	Andrés Alba Talamantes
13	Jorge Eduardo Hemkes Moreno
14	Olimpia Pérez Mendoza

SEGUNDO. Se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de las **siete personas** que se citan a continuación, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO, punto 6, apartado B**, de esta resolución.

No.	Ciudadano
1	Natalia Margarita Campeán Rodríguez
2	Silvia Carolina Valdez Marín
3	Juan Pedro Ruelas Franco

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Ciudadano
4	Mariel Torres Ortiz
5	Rosa Emma García Ramírez
6	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo
7	Ademaida Garcilazo Ambris

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente resolución, se impone al **PVEM**, una multa por la indebida afiliación de cada una de las seis personas aludidas, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
1	Juan Pedro Ruelas Franco	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$70,337.52 [setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100] [Ciudadano afiliado en 2016]
2	Natalia Margarita Compeán Rodríguez	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos16/100] [Ciudadana afiliada en 2019]
3	Silvia Carolina Valdez Marín	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos16/100] [Ciudadana afiliada en 2019]
4	Mariel Torres Ortiz	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100] [Ciudadana afiliada en 2019]
5	Rosa Emma García Ramírez	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos16/100] [Ciudadana afiliada en 2019]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
6	Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo	3,284 [tres mil doscientas ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$277,465.16 [doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 16/100 M.N.] [Ciudadana afiliada en 2019]
7	Ademaida Garcilazo Ambris	3,284 [tres mil doscientas ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$277,465.16 [doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 16/100 M.N.] [Ciudadana afiliada en 2019]

CUARTO. En términos de lo establecido en la parte final del **Considerando TERCERO, numeral 6, apartado B**, dese vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en el ámbito de su competencia conozca de los actos y/o hechos ahí referidos, a efecto de que sea dicha instancia quien determine lo conducente.

QUINTO. Se dejan a salvo los derechos de Mariana Guadalupe Nayhely González Castillo y Ademaida Garcilazo Ambris, a fin de que, si es su deseo hacerlo, hagan valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad competente, los hechos relacionados con la presunta falsificación de su firma.

SEXTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta a *PVEM* será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SÉPTIMO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

NOTIFÍQUESE, personalmente a las personas denunciantes; al PVEM por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y por estrados, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/KGE/JD06/SLP/168/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de investigar dádivas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**